

NÚMERO DE ASUNTO 1904

INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO

A efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, a fin de que deje sin efectos el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, por ser completamente arbitrario y atentar en contra de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, Programa Especial de la Transición Energética y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, además de violar el derecho humano de todos a un medio ambiente más sano; así mismo, al Poder Ejecutivo Estatal, y a los Alcaldes de los Municipios de la Entidad, a que impugnen en vía de controversia constitucional ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación dicho Acuerdo.

PRESENTADA POR: Diputado Omar Bazán Flores (PRI).

FECHA DE PRESENTACIÓN: 26 de mayo de 2020, en Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado.

TRÁMITE: Turno simplificado a la Comisión de Energía.

FECHA DE TURNO: 27 de mayo de 2020.





Diputado Omar Bazán Flores 16:30 Hrs Luis Jóquez

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTE.-

El suscrito Omar Bazán Flores, Diputado de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confiere el numeral 68 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como los ordinales 169, 170, 171, 175 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta Representación, a presentar Iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de hacer un llamado y exhorto al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Energia a fin de que deje sin efectos el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación; así como para que el Poder Ejecutivo Estatal y los Alcaldes de los Municipios de la Entidad presenten Controversias Constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser completamente arbitrario y atentar en contra de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, Programa Especial de la Transición Energética y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y las metas establecidas en la Ley de Transición Energética, lo anterior de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



La "transición energética" supone un cambio estructural a largo plazo en los sistemas energéticos de un país o una región, o en específico en este momento de la historia en el mundo entero. Esto ya ha sucedido en la historia del mundo, madera, carbón, petróleo, electricidad, energía nuclear, energía solar, hidrogeno, en fin la gama sigue aumentando.

El diseño de los sistemas de energía del mundo, hasta la década de 1950, se sostenian en sistemas de energía locales o regionales, pero ahora enfrentamos un modelo global, lo que hacen unos y otros países es de tal impacto que afecta a todo el mundo, así que nadie nos podemos abstraer de las acciones y repercusiones del uso de un sistema energético no sustentable que afecte la biosfera.

Las transiciones energéticas históricas se presentan como eventos prolongados, que se desarrollaron durante muchas décadas, pero actualmente nos enfrentamos a un modelo de transición energética que se desarrolla bajo políticas y condiciones tecnológicas muy diferentes, pues estamos conscientes del daño global al plantea con el uso de combustibles fósiles, así pues esto se encuentra relacionado intimamente con el desafío más importante que enfrenta la humanidad, que es el problema calentamiento global y cambio climático.

La capacidad del sistema terrestre para absorber las emisiones de gases de efecto invernadero ya está agotada y, según el Acuerdo Climático de París, las emisiones actuales deben detenerse por completo para 2040 o 2050 y estamos frente a una disyuntiva, o se desarrollan tecnologías para captura masiva y absorción de carbono disminuyendo su presencia en la atmósfera o requerimos de una agresiva acción de transición de energía hacia la eliminación de los combustibles fósiles como el



petróleo, el gas natural y el carbón, para dar cauce al uso de energías limpias o libres de carbono, como el combustible nuclear (uranio) y las fuentes de energía renovable eólica, hidroeléctrica, solar, geotérmica y marina.

Una implementación oportuna de la transición energética requiere múltiples enfoques paralelos y la intervención de todos los países del mundo pero debemos contar con una visión clara de lo que sucede y tomar acciones efectivas, pues al parecer estamos inmiscuidos, al menos en México en una cómoda transición energética, en la que damos un paso para adelante y dos para atrás, pareciera que estamos jugando nuestro papel de país en desarrollo, y no pensar que si encabezamos la transición hacia otras energías podría ser el pivote para alcanzar el desarrollo pleno del México y convertirnos en una potencia energética, sol, mar, geotermia y aire son recursos energéticos renovables que abundan en nuestro territorio, pero en lugar de tomar la firme decisión de usarlos, seguimos pensando en el petróleo como base estructural de nuestro sistema energético y de la economía.

Mientras en el mundo los países desarrollados piensan que después de un período de transición, se espera que la producción de energía renovable constituya la mayor parte de la producción de energía del mundo. La empresa de gestión de riesgos DNV GL anticipa que, para 2050, la mezcla de energía primaria del mundo se dividirá en partes iguales entre fuentes fósiles y no fósiles.

Una proyección de 2011 formulada por la Agencia Internacional de Energía prevé que la energía solar fotovoltaica suministre más de la mitad de la electricidad del



mundo para 2060, reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Es por ello que debemos exigir de nuestro gobierno acciones hacia una transición energética efectiva, como una acción que enfrente las consecuencias de los gases invernadero en el mundo, sí es cierto tenemos a nivel federales la Ley de Transición Energética, Ley de Energía Geotérmica, Ley de Energía para el Campo, Ley de los Órganos Coordinados en Materia de Energía, Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, Ley General de Cambio Climático y a nivel local, la Ley para el Fomento, Aprovechamiento y Desarrollo de Eficiencia Energética y de Energías Renovables del Estado de Chihuahua y Ley de Cambio Climático del Estado de Chihuahua, estos cuerpos normativos quedan en una dislexia legislativa y poca efectividad en su aplicación por falta de programas operativos y presupuestales que les de acción, rumbo y sentido, es francamente desastroso.

El artículo 1o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.

Por su parte, el artículo 4o., párrafo cuarto, constitucional, consagra el derecho fundamental a la protección de la salud, previendo facultades concurrentes de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Además,



en su quinto párrafo reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, y el deber correlativo del Estado de garantizar el respeto a ese derecho.

Los derechos humanos a la salud y a la vida misma, así como a una vida digna, conllevan obligaciones correlativas para el Estado, tendentes a lograr, por una parte, al menos un nivel esencial del disfrute y, por otra, un desarrollo progresivo a fin de alcanzar su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos que disponga.

Esa finalidad de alcanzar el disfrute más alto de bienestar físico, mental y social, esto es, el disfrute del más alto nivel posible de salud y, por ende, garantizar la vida de las personas, implica para los poderes públicos la obligación no sólo de asegurar la prestación de servicios públicos de asistencia médica y social que satisfagan las necesidades de la población, sino también el deber de adoptar medidas legislativas, administrativas o ambas, para asegurar la plena efectividad de ese derecho; de ahí que debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

El derecho a la salud está directamente relacionado con el medio ambiente, pues es sabido que un ambiente en polución es dañino a la salud de los seres humanos, provocando enfermedades muy graves y sistémicas, por ello es pertinente citar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha señalado que el derecho fundamental a la salud impone deberes no sólo a los poderes públicos dentro del Estado, sino también a los particulares (especialmente a los que se dedican al ámbito de la salud), pues de su contenido y estructura se desprende que



es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Así pues, conforme a los valores que subyacen en el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, la eficacia en el goce del nivel más alto de esos derechos fundamentales implica deberes para todos los miembros de la comunidad, pues la actuación unilateral del Estado y los poderes públicos resulta insuficiente para lograr esos fines, si no es acompañada de conductas sociales dirigidas a la consecución de esos valores, por lo que se ha considerado que el derecho a la protección de la salud implica una responsabilidad social, compartida entre el Estado, la sociedad y los interesados en acceder a los servicios de salud.

Tal criterio, si bien se enfoca en la prestación de los servicios de salud, por igualdad de razón puede ser válidamente aplicado al caso del derecho a un medio ambiente sano, es decir, es una responsabilidad de todos.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Rio de Janeiro, Brasil, en junio de mil novecientos noventa y dos (Primera Cumbre de la Tierra), surgieron una serie de principios que rigen el desarrollo sustentable de las naciones, plasmados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, entre los que se encuentra el principio 10, en el cual se establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que les corresponda. Los Estados, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil que se reunieron en Estocolmo en 1972, proclamaron:



"El hombre es a la vez obra y artifice del medio que lo rodea, el cual le da sustento material y le brinda oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente...los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma."

El principio 1 de esa declaración señala:

"El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar..."

Así, la protección al medio ambiente se considera como una condición previa para el disfrute de una serie de derechos humanos, por lo que como elemento indispensable para la conservación de la especie humana, y para el disfrute de otros derechos humanos, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la colectividad en general.

Por esa razón, el Estado tiene el deber de implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación ambiental, las cuales deben contar con la participación solidaria de la ciudadanía, considerando inclusive el concepto de salud, como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad en las personas.



El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige que los Estados Parte desarrollen medidas en forma progresiva con el fin de "lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta". Con la adopción en 1988 del protocolo adicional a la Convención, se incluyó el derecho a vivir en un ambiente sano, y el deber de las partes de promover "la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente".

El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, de 22 de marzo de 1985, suscrito y ratificado por el Estado Mexicano, reconoce el impacto nocivo de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente, y establece como obligación general de los Estados Parte, en su artículo 2, numeral 2, inciso b), adoptar las medidas legislativas o administrativas adecuadas y cooperar en la coordinación de políticas apropiadas para controlar, limitar reducir o prevenir las actividades humanas que tienen o pueden tener efectos adversos como resultado de la modificación o probable modificación de la capa de ozono.

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 10, establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público.

El enfoque general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo referente a la protección del medio ambiente, ha sido reconocer que, por la



naturaleza y propósito del derecho de los derechos humanos, impone la necesidad de un nivel básico de salud ambiental, al decir:

"El respeto a la dignidad inherente de la persona es el principio en el que se basan las protecciones fundamentales del derecho a la vida y la preservación del bienestar físico. Las condiciones de grave contaminación ambiental, que puedan causar serias enfermedades físicas, discapacidades y sufrimientos a la población local, son incompatibles con el derecho a ser respetado como ser humano".

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas relacionados con el cambio climático.

En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kioto, que cuenta con medidas más enérgicas (y jurídicamente vinculantes).

En 2006 se enmendó en Nairobi este Protocolo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y se tenía previsto adoptar un nuevo protocolo en el año 2009 en Copenhague, el cual se tuvo que retrasar y mover a México en el 2010.

Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el



sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

En la definición de este objetivo es importante destacar dos aspectos:

No se determinan los niveles de concentración de los GEI que se consideran interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático, reconociéndose así que en aquel momento no existía certeza científica sobre qué se debía entender por niveles no peligrosos.

Se sugiere el hecho de que el cambio del clima es algo ya inevitable por lo cual, no sólo deben abordarse acciones preventivas (para frenar el cambio climático), sino también de adaptación a las nuevas condiciones climáticas.

El nueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto firmó ad referéndum el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado en la ciudad de Kioto, el once de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

El citado Protocolo fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el veintinueve de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del primero de septiembre del propio año.



En 2015 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, informó sobre las políticas públicas que el Gobierno de la República impulsa y desarrolla para dar cumplimiento a los compromisos de mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI), así como adaptación al cambio climático durante el periodo 2020-2030 que, como país, se presentaron ante el Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas a finales de marzo de ese año.

En el proceso de la elaboración de la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC) se consultaron diversos actores de la sociedad civil, entre ellos organizaciones no gubernamentales, academia y representantes de la industria privada de todos los sectores de la economía, mediante talleres participativos y una encuesta a nivel nacional.

En materia de mitigación, el entonces titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, se refirió a las medidas voluntarias y no condicionadas que se estima México podrá solventar con recursos propios y que se apegan a los objetivos, instrucciones y prioridades establecidas en la Ley General de Cambio Climático (LGCC).

- A. El Estado Mexicano se comprometió a reducir de manera no condicionada el 25% de sus emisiones de GEI y de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (bajo BAU) al año 2030. Este compromiso implica una reducción del 22% de GEI y una reducción del 51% de Carbono Negro.
- B. Con respecto a la industria, se tiene como meta para el 2024 generar el 35% de energía limpia y al 2030 el 43%, que incluya energía renovable.



cogeneración con gas natural y termoeléctricas con captura de bióxido de carbono (CO2), así como la sustitución de combustibles pesados por gas natural y biomasa en la industria nacional.

- C. Asimismo, reducir 25% todas las fugas, venteo y quemas controladas de metano y controlar las particulas negras de hollin en equipos e instalaciones industriales.
- D. En cuanto al transporte, se trabaja en la homologación con el TLCAN de la normatividad ambiental para vehículos tanto nuevos como en circulación, así como en vehículos no carreteros: locomotoras, barcos y maquinaria móvil agrícola y de construcción; se incrementará la flota vehícular a gas natural y se dispondrá de combustibles limpios; se modernizará el parque vehícular y se reducirá la importación de usados; se impulsar el Transporte Multimodal de carga y pasajeros.
- E. En lo urbano se contemplan las edificaciones y ciudades sustentables; se promoverá el uso doméstico de calentadores y celdas solares; se llevarán a cabo acciones para recuperar y usar el metano en rellenos sanitarios municipales y se promoverá el uso de plantas de tratamiento de aguas residuales.
- F. Para el sector agropecuario y forestal se apoyará la tecnificación sustentable del campo; se impulsará la tasa cero de deforestación, las plantaciones forestales comerciales y la recuperación de ecosistemas naturales y pastizales; así como el uso de biodigestores en granjas agropecuarias.



Es la primera vez que México asumió un compromiso internacional de esta naturaleza, lo cual fue reconocido por la comunidad internacional y pone al país a la vanguardia en el tema de cambio climático.

En ese entonces el Gobierno de la República señalaba que la prioridad es proteger a la población de los fenómenos naturales vinculados al cambio climático y garantizar la sustentabilidad ambiental, económica y social de las comunidades en todo el territorio nacional, lo cual es acorde a la naturaleza del derecho humano a un medio ambiente sano.

Recordemos que si bien es cierto el protocolo de Kioto no establecía obligaciones vinculantes, México las adoptó de forma voluntaria, entre ellas compromisos medibles de reducción de emisiones y la adopción de medidas para disponer de combustibles limpios para el uso de automóviles y camiones de transporte y que además dichos compromisos no derivan de una administración en particular sino de compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, para resolver un problema de interés colectivo, global e internacional, como lo es el cambio climático.

El 6 de junio de 2012 se publicó la Ley General de Cambio Climático que entró en vigor en octubre de ese mismo año y que convirtió a México en el primer país en desarrollo en contar con una ley en la materia. La Ley General de Cambio Climático establece la creación de diversos instrumentos de política pública, entre ellos, el Registro Nacional de Emisiones (RENE) y su Reglamento, que permitirán compilar la información necesaria en materia de emisión de Compuestos y Gases Efecto Invernadero (CyGEI) de los diferentes sectores productivos del país.



Este Reglamento establece la creación de acuerdos que definirán los aspectos técnicos para la operación del Registro. Uno de estos Acuerdos, el de Agrupación de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, así como su Potencial de Calentamiento Global, identifica cada una de las sustancias químicas conforme a una denominación internacionalmente aceptada y definida por asociaciones especialistas en la materia. Además, contempla la fórmula y la familia química a las que pertenece la sustancia así como su potencial de calentamiento global, mismo que es congruente con lo publicado en el Quinto Reporte de Evaluación del IPCC. Los diferentes sectores reportan obligatoriamente sus emisiones directas e indirectas de gases o compuestos de efecto invernadero de todas sus instalaciones cuando excedan las 25,000 tCO₂e (toneladas de CO₂ equivalente) son:

Energia

Industria

Transporte

Agropecuario

Residuos, y

Comercio y Servicios.

El Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, contiene la estimación de las emisiones antropogénicas de gases y compuestos de efecto invernadero y de la absorción por los sumideros en México. Con lo anterior se cumple ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) al "Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes, de conformidad con el Artículo 12, inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el



Protocolo de Montreal, utilizando metodologías comparables que habrán de ser acordadas por la Conferencia de las Partes"

La estimación de las emisiones, distintas a las de la quema de combustibles fósiles, con excepción de las relativas al cambio de uso de suelo, se realizará cada dos años, y la estimación del total de las emisiones por las fuentes y las absorciones por los sumideros de todas las categorías incluidas en el Inventario, se realizará cada cuatro años

El Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero reporta que México emitió 683 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de gases efecto invernadero (GEI) en el 2015. Este es el resultado de la actualización del "Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI)" que presenta el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en apego al Artículo 74 de la Ley General de Cambio Climático.

El Inventario es un instrumento que nos permite conocer las emisiones de nuestro país que se originan por las actividades humanas en todo el territorio nacional. Es un ejercicio fundamental para diseñar las políticas de reducción de emisiones, entendiendo las principales fuentes y el papel que juegan los ecosistemas capturando parte de estas emisiones.

El inventario comprende las emisiones de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perflourocarbonos, hexafloruro de azufre y carbono negro en el periodo 1990-2015. El gas más relevante que emite nuestro país es el bióxido de carbono con 71% de las emisiones, seguido del metano con 21%.

Del total de las emisiones, 64% correspondieron al consumo de combustibles fósiles; 10% se originaron por los sistemas de producción pecuaria; 8% provinieron de los procesos industriales; 7% se emitieron por el manejo de residuos; 6% por las



emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías y 5% se generaron por actividades agrícolas. En el inventario también se contabilizaron 148 MtCO2e absorbidas por la vegetación, principalmente en bosques y selvas. El balance neto entre emisiones y absorciones para el año 2015 fue de 535 MtCO2e.

En esta publicación también se incluye un inventario de carbono negro (CN), partículas contaminantes que se producen por la combustión incompleta de los combustibles fósiles, uso residencial de la leña, incendios forestales, quemas agrícolas y de residuos. Se estimó que en el 2015 se generaron 112,240 toneladas de este forzador climático de vida corta que produce efectos negativos en la salud pública.

En 1990, las emisiones de GEI en México fueron 445 MtCO2e. Es decir entre 1990 y el 2015 las emisiones de México aumentaron un 54%, con una tasa de crecimiento anual (TCMA) de 1.7%. No obstante, la TCMA del 2010 al 2015 disminuyó a 0.8%. La integración del INEGYCEI es producto de la colaboración inter institucional con dependencias de la Administración Pública Federal, centros de investigación, así como organismos del sector privado que proporcionan información actualizada y pertinente al INECC.

El INEGYCEI forma parte del Sistema de Información sobre el Cambio Climático y es, desde 2014, Información de Interés Nacional –oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados y municipios- como lo indica la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

El Inventario será sometido a revisión técnica por un grupo de expertos designados por la CMNUCC y especialistas de otros países, quienes emiten recomendaciones sobre la calidad de la información y las áreas de oportunidad con el propósito de reforzar las futuras actualizaciones. Este ejercicio a nivel internacional es parte



fundamental de la transparencia que se espera de los países y permite evaluar el estado que guarda el problema del cambio climático global.

El INEGYCEI es la base de la contribución nacionalmente determinada (NDC por sus siglas en inglés) que México presentó en las negociaciones internacionales que condujeron al Acuerdo de Paris, y debe ser un insumo fundamental para el desarrollo del Programa Especial de Cambio Climático.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se contempla el Programa Especial de Cambio Climático que señala en su objetivo 3 lo siguiente:

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones

Hoy en día, uno de los mayores retos que tiene el mundo son los efectos del cambio climático; el clima nunca había cambiado tan rápido como en los últimos años y estos cambios están relacionados con el consumo de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural.

La quema de estos combustibles genera y libera a la atmósfera dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, lo cual provoca que la temperatura global de nuestro planeta vaya en aumento y se modifiquen los patrones climáticos, con daños severos al medio ambiente y a nosotros mismos.

Los efectos del cambio climático son evidentes: aumento gradual en el nivel del mar, patrones de lluvias cambiantes, sequias prolongadas, disminución de los glaciares de montaña, derretimiento de los casquetes polares y mayor incidencia de huracanes, entre otros. Todo esto pone en riesgo a la población, y tiene consecuencias en prácticamente todos los sectores de la economía. Por lo tanto, es necesario actuar de inmediato para limitar el



incremento promedio de la temperatura global y así evitar daños irreversibles y el deterioro en nuestra calidad de vida.

En este capítulo se describen algunas de las actividades realizadas por las Secretarias de Estado participantes, enfocadas a la mitigación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Como una de las estrategias se señala lo siguiente:

"Estrategia 3.2. Acelerar la transición energética a fuentes de energía menos intensivas en carbono."

El consumo acelerado de las energías fósiles es un tema relevante no sólo por el detrimento de las principales reservas del mundo de los hidrocarburos o por la multiplicidad de factores políticos que afectan su sistema de precios, sino por los efectos adversos que su explotación ha tenido en la distorsión de temperaturas del medio ambiente como ya lo advertimos.

Es por esa razón que los gobiernos en el mundo han tratado de identificar e implementar nuevas políticas que permitan generar un "cambio estructural en el sistema energético" para poder "asegurar el suministro a través de la adopción de energías renovables y la promoción de la eficiencia energética combinada con la eliminación gradual de las energías fósiles", es decir, de aquello de denominamos "transición energética".

En México, este debate se integra oficialmente en la agenda nacional con la promulgación de la Ley de Transición Energética en 2015, la cual, según se estipula en su artículo primero, tiene como objetivo: "regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos".



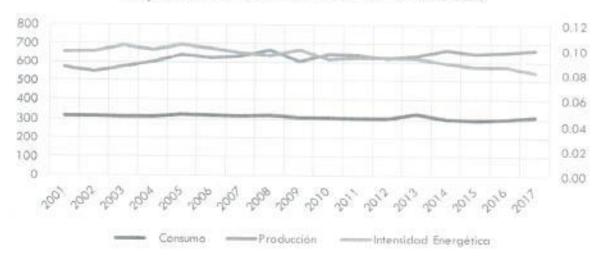
Las metas derivadas de este objetivo general se establecen en el Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) cuyas directrices, de acuerdo con su versión 2014-2018, se dividen en tres principales rubros: desarrollo económico y competitividad, donde se establece como estrategia principal disminuir el costos de los procesos de producción de diversas fuentes energéticas —que abarca desde fósiles hasta renovables; seguridad energética: integra a las directrices dirigidas a la disminución de las importaciones y finalmente, cambio climático, cuyos lineamientos se establecen en la reducción de gases de efecto invernadero determinada por tratados internacionales.

Bajo dichos lineamientos, el significado de la "transición energética" para México no refiere especificamente, a la disminución de las energias fósiles sino a la disminución de la demanda nacional en sectores secundarios, para que una mayor proporción de las ganancias generadas del sector de hidrocarburos sean integrados dentro de los ingresos del Estado. En este sentido, la adopción de las energías renovables más que establecerse como una medida de sustitución, se estratifica como un sistema secundario de complementariedad.

Dichos supuestos, denotan una desarticulación entre la producción y el consumo total de energías renovables, tal y como se muestra en la siguiente gráfica pues, mientras que su producción ha tenido un incremento promedio de 2001 a 2017 de 1.04%, su consumo presenta un decremento de -0.10%. En contraste con otras fuentes de energía como el Gas Natural —considerada la nueva adicción del siglo XXI— que ha tenido un crecimiento promedio del 6.18%.



Gráfica 1 Proporción consumo-demana de renovables



Con datos de :Secretaria de Energia (2019)

Desde esta perspectiva, el declive de la intensidad energética de México (línea gris), no ha disminuido directamente por el "desarrollo de energías renovables" sino por el declive de la producción y consumo de petróleo; sector que ha registrado una pérdida promedio del -10% y -4% respectivamente. La competitividad de las energías renovables, por tanto, no se ha insertado dentro de una estrategia coherente para contrarrestar los riesgos derivados de la disminución de las reservas petrolíferas nacionales por lo que, en contraposición a los lineamientos de PRONASE, se advierte en el largo plazo, un posible incremento de precios energéticos nacionales.

Aunado a ello, la seguridad energética de México, entendida como el nivel de importación se verá socavada, dado que la oferta del gas natural, que se ha



convertido la segunda fuente energética del país, depende en un 95% de las importaciones de Estados Unidos; tendencia que podría incrementarse de manera alarmante ante la pérdida de -7.4% de la ya escaza producción nacional durante los últimos cuatro años.

Este mismo dilema, se desarrolla dentro del sector petrolero ya que si bien ha existido un incremento en las exportaciones, un objetivo buscado dentro de los lineamientos de PRONASE, estas no necesariamente responden a las necesidades nacionales ya que el aumento de las exportaciones tiene que ver directamente con el incremento de los precios del crudo Brent; acontecimiento que ha sido resultado del posible recorte de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para equilibrar al mercado, sin embargo, dicho recorte en gran parte, se verá reflejado en la disminución de la disponibilidad de crudo pesado, al ser de menor precio.

El cambio climático, analizado como una estrategia y no como un fin en sí mismo, refleja las iniciativas de proyectos de desarrollo de energias renovables. Las cuales, en primera estancia, se habían puesto en licitación para conjuntar la inversión pública y privada quizá, es por ello que en 2017 se registró una inversión de 6,600 millones de dólares, cantidad que reflejo un incremento del 810% más con respecto al 2016. No obstante, la cancelación de este sistema abierto por el actual gobierno, ha generado reticencias de inversionistas, no se diga un ausencia total en un esquema de sustitución de la movilidad urbana a autos eléctricos, por lo que el proceso de transición en México no se ha adaptado ni a las necesidades ni a los objetivos estratégicos del gobierno.

Las iniciativas más que intentar disminuir el uso de hidrocarburos se dirigen a incrementar la disponibilidad de fuentes de energía, si bien esto es fundamental, también es necesario implementar estrategias complementarias para que éstas



últimas sean adaptadas dentro de los hábitos de consumo de la población, por ende, se sugiere el despliegue de nuevas reglamentaciones de consumo, tanto para el uso de tecnologías proambientales como ciertos impuestos o barreras comerciales a las contaminantes pues, de esta manera, se establecería una mejor alineación de objetivos de PRONASE, pero lo más importante es brindar opciones a los consumidores de clase media a fin de que mediante un esquema natural de oferta y demanda tengan a su alcance vehículos automotores eléctricos, solo así se empezará con un esquema natural de transición energética.

Bajo esta hipótesis, nos hacemos la pregunta de si el proyecto de construir más refinerías en México emprendido por el gobierno federal abona a la estrategia que hemos esbozado de la transición energética como respuesta al cambio climático.

Construir la refinería Dos Bocas como se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo, para producir 400,000 barriles diarios procesando crudo pesado, demandará una inversión de US\$12.000 millones, esto es mucho más de los US\$8.000 millones planeados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según el informe proyectado por Citibanamex.

De acuerdo con la experiencia internacional, llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza les tomará ocho años, y no tres, como ha puesto por requisito el mandatario, consignaron.

En un análisis desarrollado por el área de investigación económica del banco global, explican que la declaración de que ninguna de las cuatro empresas invitadas a la licitación, cumplía con los términos de la convocatoria en tiempo (tres años) y costo (hasta US\$8.000 millones "confirma que han sido equivocados los estimados de tiempo y costo por parte del gobierno".

A la vez que "distraerán la atención de Pemex para la construcción, sobre todo dado los graves problemas que debe atender".



Con estas estimaciones, se suma Citibanamex a las proyecciones de otros analistas, como los de la calificadora Moody's, y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) que, desde el año pasado, tomaron también la experiencia internacional para advertir que una refinería cuesta el doble de los US\$8.000 millones que de inicio se planea. La calificadora, tomó por ejemplo el caso de Ecuador, que le ha tomado más de 10 años construir una refinería, y no ha podido aún terminarla.

Moody's, una de las tres más importantes calificadoras ha emitido un comentario claro sobre la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo día del anuncio de la construcción, advirtiendo se eleva el riesgo de sobregiros de costos y retrasos que presionarán aún más las finanzas de Pemex y del gobierno federal.

En 1938 cuando el presidente Cárdenas realiza la expropiación petrolera, a consecuencia del desacato de las empresas petroleras extranjeras a una sentencia de la suprema corte que obligaba a estas a cumplir con sus obligaciones para con los trabajadores, provocó una reacción mundial con críticas al Gobierno de Lázaro Cárdenas, entre estas críticas se hablaba, que México sería incapaz de producir Petróleo, desde su exploración, extracción, transformación, distribución y comercialización porque ello se lograba con tecnología que México no tenía.

Entonces, el presidente Cárdenas tuvo la visión de crear el Instituto Politécnico Nacional, que fue semillero de todos los técnicos que requería la industria petrolera nacional, fue hasta 1965 a iniciativa del presidente Díaz Ordaz, que se crea el Brazo tecnológico de Pemex, un centro de investigación que llegó a ser un centro de investigación petrolera con tecnología de punta, que logró colocar patentes en materia de catalizadores utilizados en refinerías de todo el mundo, la investigación



científica es tan importante porque evita la dependencia tecnológica y garantiza la independencia de los países.

El presidente López Obrador declaró desierta la convocatoria para la construcción de la refinería de Dos bocas en Paraíso Tabasco, ninguna de las empresas participantes reunió los requisitos y garantías, sobre todo los términos de tiempo para la culminación de ese proyecto, lo que determinó la decisión de que sea construida por Pemex, el cambio consistirá que en lugar de una refinería grande serán dos pequeñas con un costo de ocho mil millones de dólares, entendemos que con el apoyo determinante y guía del Instituto Mexicano del Petróleo, lo que significa un desafío nuevamente para los técnicos mexicanos, como en los tiempos de la expropiación.

No está en discusión la conveniencia o inconveniencia de construir una refinería para producir gasolina, cuando el consumo de gasolinas para vehículos automotrices en el mundo, proyecta decaimiento y cuando comienzan a proliferar los vehículos híbridos que consumen energía eléctrica y la tendencia mundial va en dirección de desalentar el consumo de gasolina, para privilegiar las fuentes de energías limpias y alternas, lo que ponemos en debate es la utilización de nuestros recursos para ese fin, en lugar de utilizarlos para impulsar el automóvil eléctrico.

Así pues, es necesario verificar si la estrategia de producir más gasolina e invertir ocho mil millones de dólares en la construcción de dos nuevas refinerías, ese alinea con las estrategias señalas en el artículo 27 fracción III de la Ley de Transición Energética que establece la obligación de reducir, bajo criterios de viabilidad económica, la dependencia del país de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía, así como los compromisos internaciones asumidos dentro del Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.



El PRONASE es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal, de acuerdo con la Ley de Planeación, establecerá las acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia que permitan alcanzar las Metas en materia de Eficiencia Energética establecidas en términos de esta Ley. Será un programa especial en los términos de la Ley de Planeación. El orden de importancia de las acciones a desarrollar estará en función de la rentabilidad social de las mismas, conforme lo señala el artículo 35 de la Ley de Transición Energética y ya explicamos que tranistar a energías renovables para sustituir los combustibles fósiles en el transporte individual debe ser prioritario, por lo que dicha estrategia al menos en principio parece contraria al incremento de producción de gasolina.

Claramente en el artículo 36 fracción VIII de la Ley de Transición Energética se obliga a incluir en el PRONASE acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia en materia de Eficiencia Energética que permitan promover la reducción de emisiones contaminantes a través de la Eficiencia Energética y la sustitución de combustibles en el uso de transporte individual que utilice hidrocarburos, por lo que es necesario, se determine la compatibilidad estrategia entre las dos acciones, impulsar el consumo de gasolina invirtiendo grandes suma de dinero en la construcción de dos refinerías o impulsar la transición energética a vehículos que utilicen combustibles alternos, pues de no haber un análisis profundo de esta incompatibilidad se esta violando por omisión la Ley de Transición Energética y los compromisos internacionales en materia de reducción de gases contaminantes.

Mientras en el resto del mundo los países desarrollados planean hacer grandes inversiones en tecnología para impulsar los vehículos eléctricos, en México estamos estancados al parecer en un debate petrolero como riqueza nacional, producir



nuestra propia gasolina, estrategia tal vez plausible en 1950, pero que actualmente se antoja rezagada, pero independientemente de que compartamos esta opinión, lo que sí es deseable y obligatorio para el Estado Mexicano es que de que se alinee los objetivos y metas de producción de gasolinas con el de la sustitución de combustibles en el uso de transporte individual que usa hidrocarburos.

El Programa Especial de la Transición Energética 2017-2018 (PETE), es uno de los instrumentos de planeación que establece la Ley de Transición Energética (LTE), el cual incorpora metas, estrategias y lineas de acción del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018 (PEAER), y propone un panorama actualizado a partir de la implementación de Reforma Energética, se puede consultar en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/27972 3/Informe_Renovables_2017_11122017.pdf y de su resumene ejecutivo se advierten los siguientes avances en 2017:

- A. De acuerdo al Reporte de Avance de Energías Limpias, Primer Semestre 2017, México generó el 20.82% de su energía eléctrica con fuentes limpias, al alcanzar 33,274.31 gigawatts-hora (GWh), lo que refleja un crecimiento del 8.79% con respecto al primer semestre de 2016.
- B. La capacidad instalada para generar energía a partir de fuentes limpias, llegó a 21,541.72 megawatts (MW), que representan el 29.09 % de la capacidad total instalada.



- C. Se integró el Grupo Interinstitucional de seguimiento a los proyectos de energías renovables ganadores de las primeras tres Subastas de Largo Plazo, que utiliza una plataforma que permite el seguimiento a dichos proyectos para coadyuvar en su construcción y operación.
- D. Se elaboraron los "Lineamientos para el Aprovechamiento de la Energía Geotérmica para Usos Diversos", para promover la inversión en proyectos de pequeña y mediana escala y así detonar un mercado potencial.
- E. Se publicaron los Mapas de Ruta Tecnológico de Geotermia, de Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos, Energía Solar Térmica, del Océano, y para la implementación de políticas públicas sobre generación distribuida. Estos documentos contienen la información sobre los pasos a seguir para promover el desarrollo de estas tecnologías, se incluye desde la formación de recursos humanos, la investigación y cuantificación del recurso energético y la manufactura de la tecnología por parte de la industria mexicana.
- F. En agosto se publicó el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes que ayudará a la incorporación al sistema de nuevas tecnologías y más energía renovable.
- G. A partir de lo establecido en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031 (PRODESEN), se espera una inversión de 219 mil millones de pesos, que corresponde a los proyectos y obras de ampliación de las líneas de Transmisión, así como la modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT).



- H. El desarrollo de infraestructura de transmisión y distribución contribuyeron a que las pérdidas totales de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional se redujeran de 13.62% al cierre del 2016 a 12.46% a fines de 2017. La meta establecida para 2018 es de 13.38 %.
- Se alcanzó una cifra de 2,366 técnicos certificados en energías renovables y eficiencia energética.
- J. Se superó la meta esperada en el índice de cadenas de valor que publica Bloomberg: el Climatoscope2/, llegando a 4.23; la meta establecida fue de 4.1.
- K. Se desarrollaron criterios técnicos para evaluar empresas proveedoras de tecnologías y servicios de Energías Renovables con el objetivo de crear un estándar de proveedores confiables.
- L. En agosto se dio inicio el Programa de Maestría en Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CCUS) UNAM-Berkeley. En noviembre se publicó la convocatoria para la conformación del Centro Mexicano en CCUS (CEMCCUS).
- M. Se realizó la primera licitación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) para electrificación de áreas sin acceso a la red eléctrica mediante energías limpias.



- N. Se creó el Grupo de Trabajo para actualizar la metodología de externalidades ambientales y sociales en el que participan Secretaría de Energía (SENER), Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- O. Se coordinó la organización de dos Sesiones Ordinarias y los trabajos del Consejo Consultivo para la Transición Energética (CCTE), para efectos de la actualización de los instrumentos de planeación establecidos en la LTE.

A pesar de la normatividad existen ya no se encuentran referencias al seguimiento del programa de transición energética después del 2018, por el contrario, se advierte claramente una estrategia basada en ejes o pivotes diferentes en materia energética, como en principio quiere abrir la segunda etapa de la producción petrolera mexicana, basada en eficiencia productiva y no corrupción lo que sin duda es bueno, pero contrario a la estrategia global de transición energética que ya habíamos empezado y que a mi juicio debemos acelerar en forma agresiva.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) dará prioridad al fortalecimiento de las Empresas Productivas del Estados, al sistema nacional de refinación y petroquímica, certidumbre regulatoria, formación de capital humano, principalmente, pero en materia de energías limpias se limita a promoverlas con proyectos comunitarios de generación de energía renovable, una actividad verdaderamente tímida para enfrentar el reto, no se trata de hacer llegara a la gente pobre la energía con esas herramientas, se trata de transitar a otros sistema



energético nacional, basado en cuando menos en un equilibrio entre energías limpias y energías provenientes de combustibles fósiles y eso debe ser ya.

De acuerdo con PND 2019-2024 el eje general de "Desarrollo económico" el "Objetivo 3.5 Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad energética."

Señala que el sector energético se plantea como una de las palancas estratégicas para impulsar el desarrollo económico de México. Para satisfacer la demanda creciente de energía a precios accesibles y asi garantizar la soberanía y seguridad energética nacional, será necesario potenciar la producción nacional de energía de manera sostenible, promoviendo su generación con fuentes renovables.

El documento señala que en los últimos años, el sector energético mexicano se ha contraido, lo que produjo un bajo crecimiento económico y una mayor dependencia de las importaciones.

"Las principales causas de esta desaceleración son el bajo nivel de inversión pública en el sector, la declinación natural de las reservas petroleras, la caída en el precio de la mezcla mexicana de exportación, la corrupción y las restricciones financieras y operativas de las empresas productivas del Estado: Pemex y CFE,"

La producción nacional de hidrocarburos ha presentado una tendencia a la baja en los últimos 15 años. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex, el principal productor, redujo su producción de petróleo de 3,383 miles de barriles diarios (mbd) en 2008 a 1,811 mbd en 2018. Derivado de la falta de mantenimiento, el Sistema Nacional de Refinación operó en 2018, en promedio, a 41% de su capacidad.



En particular, la producción nacional de combustibles está en mínimos históricos, provocando que, en 2018, 78% de la demanda nacional de gasolinas se cubriera con importaciones según la Secretaría de Energía.

De manera similar, la producción de petroquímicos se ha reducido de forma sostenida, en 2018 los niveles de producción estuvieron 56% por debajo de los registrados en 2010. En cuanto al gas natural, de acuerdo con datos del INEGI, la producción nacional se redujo 24% de 2010 a 2018. Esta caída ha generado que el gas sea cada vez más escaso en zonas alejadas a puntos de importación, como es el caso del sureste del país.

Precisa que algunos de los principales retos del sector eléctrico son mantener un balance en el suministro de combustibles necesarios para la generación de electricidad; diseñar y aplicar tarifas que cubran costos eficientes y envien señales adecuadas a productores y consumidores; aumentar la inversión en mantenimiento y ampliación de la infraestructura de transmisión, distribución y generación, promoviendo las energías limpias.

Con respecto a la cobertura de electricidad, refiere que según datos del INEGI, 98.7% de los hogares del país cuentan con servicio eléctrico. Sin embargo, casi 2 millones de habitantes que viven en pequeñas comunidades remotas, aisladas y de difícil acceso, aún no tienen este servicio. La dificultad que implica el proveer de energía eléctrica a estas comunidades es un reto que se debe de enfrentar para alcanzar el acceso universal a este servicio.

En materia de generación de energía eléctrica a través de recursos renovables, México va camino hacia las energías limpias; sin embargo, se encuentra aún en una posición muy rezagada: en 2018 se alcanzó 22.5% de la energía generada que provino de fuentes limpias. Sin embargo, para cumplir con la Ley General de Cambio



Climático y la Ley de Transición Energética, el Gobierno de México trabajará para llegar hasta un 35% para 2024.

Por otro lado, las políticas públicas en materia de energía, impulsadas por el Estado mexicano en temas de derechos humanos han sido limitadas. Existe un adeudo al reconocimiento de los derechos de las comunidades, pueblos, grupos sociales y urbanos asentados en las áreas en donde se llevan a cabo las actividades en materia energética.

Destaca que ente el estado actual del sector energético del país, el Gobierno de México pondrá en marcha una política energética, sostenible, baja en emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad energética, observando en todo momento la soberanía en la materia.

Se fortalecerán las empresas productivas del Estado, para consolidarlas como los pilares de la seguridad y soberanía energética. El fortalecimiento financiero y el incremento en la inversión productiva de Pemex, CFE y otros actores será crucial para incrementar la producción de hidrocarburos, restituir las reservas de petróleo y gas natural e incrementar la infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional.

Esto se logrará bajo los principios de máxima eficiencia y aprovechamiento responsable. El Gobierno de México evaluará la carga fiscal de las empresas productivas del Estado con la finalidad de hacerlas más rentables y eficientes, sin que ello implique un deterioro para las finanzas públicas.

Se identificarán las áreas expuestas o vulnerables a actos de corrupción en el sector. Esto permitirá contar con mayor eficiencia y transparencia en las operaciones de las empresas productivas del Estado.



Agrega que para el sector energético es prioritario restablecer la industria petroquímica, así como el Sistema Nacional de Refinación. Con esto, México podrá producir bienes con mayor valor agregado, mitigar la dependencia nacional en la importación de petrolíferos y garantizar el abasto accesible a combustibles y energía de la población en general.

"La transición a energias renovables para reducir la contribución de México al cambio climático en el mediano y largo plazo, será una constante en el programa energético del país. Para lograrlo, se fomentará y fortalecerá el capital humano y científico de alto nivel para impulsar el desarrollo científico y tecnológico orientado a aplicaciones de desarrollo sostenible."

La política pública buscará garantizar los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos sociales asentados en las áreas en donde se llevan a cabo los proyectos energéticos, generando espacios para la consulta y participación en los proyectos de generación de energía.

Destaca que se promoverán proyectos comunitarios de generación de energía renovable para erradicar la vulnerabilidad, pobreza y marginación energética.

Para alcanzar el objetivo se proponen las siguientes estrategias:

- 3.5.1 Fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las empresas productivas del Estado, al tiempo que se genera valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano. En este punto, establece una línea base (2018): 25.6% y una meta para 2024: 35.8%
- 3.5.2 Garantizar un entorno de previsibilidad y certidumbre regulatoria con base en reglas y criterios consistentes, transparentes y de fácil acceso para los actores regulados de la industria energética y que propicie el desarrollo del sector.



Al respecto, precisa que el Índice de independencia energética, definida como la producción nacional de energía primaria como proporción del consumo nacional de energía, con una línea base (2018): 0.7 y una meta para 2024: 1.0

- 3.5.3 Incrementar la producción del sector energético nacional de manera sostenible, bajo principios de eficiencia, cuidando la seguridad industrial y promoviendo el contenido nacional y la inversión.
- 3.5.4 Orientar el uso de los hidrocarburos para elaborar productos con mayor valor agregado, promoviendo el uso de técnicas de eficiencia energética.
- 3.5.5 Asegurar el abasto sostenible de energéticos de calidad a las personas consumidoras, a precios accesibles.
- 3.5.6 Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano y científico de alto nivel en el sector energético mexicano, de calidad mundial, tomando en cuenta su evolución y necesidades a largo plazo y bajo principios éticos, científicos y humanistas.
- 3.5.7 Garantizar los derechos de los pueblos indigenas y otros grupos sociales asentados en las áreas en donde se llevan a cabo las actividades en materia energética.
- 3.5.8 Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético, promoviendo la participación comunitaria y su aprovechamiento local, así como la inversión.
- 3.5.9 Identificar los riesgos de corrupción e ineficacia para prevenirlos y combatirlos en todos los procesos del sector energético.

Cabe destacar que en "Programas derivados del PND 2019-2024" no se incluye alguno en específico para el sector energía. No obstante, en la Vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se contempla al número "7 Garantizar el acceso



a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos", aunque como parte de la Agenda 2030 aprobados por la ONU y adoptados por más de 150 países. En este contexto la visión del nuevo plan nacional de desarrollo no se concatena con la del anterior gobierno, sino que prevé el uso de energías renovables para uso doméstico como eje de acción en comunidades rurales e indígenas, lo cual es loable, pero de ninguna manera estratégico con miras a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, ni a cumplir con los compromisos internacionales asumidos.

Esto contrasta con lo declarado por Víctor Manuel Contreras Toledo, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del actual gobierno que en mayo de 2019, señaló la necesidad de crear un plan nacional de transición energética, para pasar de los combustibles fósiles a una nueva civilización solar.

Durante una conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el nuevo titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dijo que se recurrirá a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que ya manejan el tema de la energía solar y la transición a ecotecnologías.

En su primera aparición pública como titular del cargo, explicó que será un plan gradual, pues "por razones estratégicas hoy en día no puede haber un cambio abrupto porque quedaríamos volando", pero que el presidente tiene claro que "esa transición se tiene que hacer tarde o temprano, y hay que trabajar en esa línea".

Reconoció que hay un cambio en todo el mundo para pasar de la base de combustibles fósiles como el petróleo, el gas; el uranio para las plantas nucleares, "a nueva civilización solar que es algo que está ocurriendo en todo el mundo, no nada más en México".



"El petróleo llegará a su fin, la mitad de los países hoy en día ya están usando su última parte de petróleo en todo el mundo, en 2050 se acaba el petróleo y le van a seguir el gas, el carbón y el uranio", por lo que comentó al presidente: "necesitariamos, Andrés Manuel, armar todo un plan nacional de transición energética muy bien pensado".

En este sentido, llamó la atención en que ahora las miradas están puestas "en lo que pasará de aquí a un año clave, el 2050, sólo 30 años", fecha en que la humanidad alcanzará nueve mil millones de habitantes, es decir, dos mil millones más en tres décadas.

"El cambio climático, que no se ha detenido a pesar de las advertencias de los científicos desde hace dos décadas, generará catástrofes de todo tipo y los alimentos que serán necesarios tendrán que generarse bajo métodos agroecológicos y no más bajo las pautas insanas y destructivas de la llamada agricultura moderna o industrial", afirmó.

Explicó que "la perspectiva de la conciencia ecológica, la habitual geometría política de izquierdas y derechas desaparece para ser reemplazada por una nueva disyuntiva; no hay más que políticas por la vida y políticas contra la vida o políticas hacia la muerte".

Esto "se traduce en políticas que enfrian el clima del planeta y políticas que lo calientan. Cada vez vamos a ir más y más, conforme pasa el tiempo, vamos a ir cada vez más definiendo todo esto en términos de lo que sucede con el cambio climático".

Pero lo dicho por el secretario no está plasmado, porque de tajo se cortó el plan estratégico ya diseñado, pues ahora nos enfocamos a una recuperación de la industria petrolera, el Plan de Recuperación Petrolera y el Programa Nacional de Electricidad, como las principales estrategias, han derivado en acciones que ponen



el freno sobre una política que apostaba por una transición energética. Mientras más protagonismo captura el sector de hidrocarburos, las energías renovables van perdiendo espacio en la agenda nacional, de tal manera que parece ser que la transición energética ha quedado en pausa por los próximos seis años, lo cual es muy grave.

Además de Pemex, la CFE han sido las protagonistas en estos primeros meses de gobierno, favorecidas en su presupuesto mientras otros organismos con un rol estratégico en el sector energético han sido limitados en recursos económicos y humanos, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y desde luego que ello trunca el modelo previsto en la Ley de Transición Energética para contra con un plan nacional de transición energética, pues actualmente no contamos con los instrumentos para garantizar su correcta implementación y lograr los objetivos planteados.

En este sentido, se ha mencionado la estrategia de promover la generación de electricidad a través de carbón, por ser una mejor opción ante la intermitencia de las energías renovables y sus costos altos de inversión, pero dejando de lado el alto costo social con el precio más alto para la salud y bienestar de la población.

A nivel internacional se transita de forma agresiva energías renovables, la tecnología y los instrumentos de política pública han creado escenarios favorables para ello. La transición energética en Alemania se espera que concluya en el año 2050; además, este país europeo tiene como principal objetivo eliminar sus plantas de carbón para el año 2038, lo cual deja a la vista la oportunidad de confiar en las energías renovables. De esta misma forma, México no puede dejar en pausa una transición necesaria y urgente, la energética, para rescatar una industria petrolera de segunda generación. No podemos olvidar que el principal propósito de la



transición energética es cumplir con las metas de reducción de emisiones presentadas en el Acuerdo de París.

El problema ha seguido en aumento entre el Gobierno mexicano y el sector de las empresas que invierten en energías renovables en México para la producción de electricidad. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ha suspendido de forma temporal la entrada en operación de nuevas plantas eólicas y solares para "garantizar la calidad" del sistema tras la repentina caída de la demanda. La acción se da en el marco de la crisis del coronavirus y responde a instrucciones de la Secretaría de Energía, que orienta sus acciones en el rescate de la industria petrolera y la producción eléctrica estatal.

El sector de la industria de energías renovables ha acusado al Gobierno de utilizar la crisis como pretexto y alertado del impacto que puede tener la medida sobre el crecimiento de la energía verde en uno de los países con mayor potencial del planeta.

El freno operativo afecta a 28 plantas solares y eólicas ya listas para arrancar, según un recuento de la iniciativa privada. Las centrales aglutinan una capacidad de 3.270 MW, suficiente para cubrir las necesidades eléctricas de casi tres millones de hogares. Es una cantidad similar a la que entró en vigor en 2019, cuando las renovables batieron récords de generación. Otros 16 proyectos en construcción con una potencia de 2.067 MW tampoco podrán conectarse a la red si la suspensión se alarga. En suma, estas plantas representan el 50% de la capacidad prevista para este año y 6.400 millones de dólares en inversión directa. Entre las empresas afectadas están los gigantes Enel e Iberdrola. Ambas contaban con varios proyectos en periodo de pruebas antes de la suspensión.



La Comisión Federal de Competencia Económica parece darles la razón. El organismo autónomo advirtió al Gobierno que el acuerdo puede generar un incremento de las tarifas eléctricas y atentar contra la competencia al favorecer las centrales de la CFE.

El Cenace y la Secretaría de Energía defienden la suspensión por la "intermitencia" de las renovables y su impacto en la "confiabilidad" del sistema, tocado por una caída del consumo de alrededor del 30% a raíz del freno de la actividad económica. "[La eólica y la solar] pueden empezar a producir a las 9.00 o a las 10.00 y a las 17.00 o 18.00 ya no y tenemos altos y bajos en el sistema cuando el consumo disminuyó", explicó Nahle. "Nos ha comprometido tanto redes de transmisión como redes de contingencia que no se cuentan con respaldo". El documento oficial enumera una veintena de fallos de distinto tipo en la red. Algunos son de 2019 y otros de los últimos días de abril. No siempre se hace una conexión explícita entre el fallo y la operación de una planta renovable.

El sector y los expertos consultados cuestionan ambos argumentos. El ingeniero Daniel Chacón, de la ONG Iniciativa Climática, reconoce que la entrada en operación de una planta puede ocasionar problemas, pero matiza el impacto. "De cualquier planta, de cualquier tecnología, siempre existe la posibilidad de originar fallas. Es inherente en todo sistema eléctrico, pero el porcentaje de renovables en la generación está entre el 6% y el 7%. Eso no significa ningún riesgo, cuando tenemos una región como California con casi un 30%", explica. El problema de fondo, asegura el consultor Severo López-Mestre, es la falta de inversión en líneas de transmisión para llevar la electricidad de las plantas a los centros de consumo. "El sistema no se está cayendo por la centrales renovables, sino porque no se está



invirtiendo en él", dice. Este déficit se arrastra desde la Administración anterior pero continúa con la actual. No hay anuncios de nueva infraestructura a la vista.

Para compensar el supuesto problema de la intermitencia, el Cenace ha dado "de alta" centrales de energía en reserva, que no estaban en operación continua por su antigüedad y altos costos de producción. Aunque el documento no especifica qué tipo de plantas son y a quién pertenecen, las centrales térmicas de la CFE están seguramente entre las beneficiadas.

En este contexto se emite el acuerdo de Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional por la Secretaria de Energía, publicado en el Diario oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020, por lo que se advierte claramente que existe ya un problema de colisión de principios constitucionales, la rectoría del estado en el sector energético y la libre competencia, relacionado con la transición energética. La CFE parte de la idea de monopolizar el mercado eléctrico para que le resulte redituable y trata de frenar la incursión de energías limpias con barreras no arancelarias por supuestos problemas en la interconexión que discrimina y violan la libre competencia, pero lo más graves es con ello se viola la Ley de Transición Energética y se está vulnerando el derecho humano a un medio ambiente sano.

La iniciativa privada cree que la razón de fondo no es técnica, sino política y responde a la agenda nacionalista de López Obrador. El presidente se ha comprometido a no revocar la reforma energética que liberalizó el sector, pero su Gobierno ha buscado la forma de reforzar el papel de la CFE a través de cambios regulatorios. "El margen de maniobra es relativamente estrecho. No puedes mover las leyes federales ni la Constitución, pero si puedes moverte en el espacio administrativo", "Te permite empujar la idea de que la soberanía reside en tener



empresas del Estado proveyendo los servicios". La cancelación de las subastas eléctricas a largo plazo es un ejemplo. Este mecanismo permitía a los generadores de energía vender su producción a la CFE a un precio fijo, lo que incrementó el atractivo de México como destino inversor. Nada más llegar al poder a finales de 2018, la Administración anuló las rondas. Parte de los nuevos proyectos paralizados por la suspensión se licitaron en la tercera y última subasta, celebrada en 2017.

Se ha llegado al absurdo de que el presidente López Obrador, frente a un parque eólico en Baja California en marzo declara "Nunca más permisos para afectar el medio ambiente", refiriéndose a las turbinas eólicas, el mismo Presidente López Obrador no menciona el problema de intermitencia en las conexiones, que es la supuesta justificación técnica de la medida, pero insistió públicamente en el "rescate" de la CFE, que ha perdido terreno ante el empuje de la generación privada, por lo que este puede ser la verdadera intención de la regulación de calidad, como una barrera no arancelaria.

Si bien el Gobierno se declara a favor de la reducción de emisiones contaminantes, la posibilidad de cumplir con las metas es cada vez más más lejana. La ley de Transición Energética, aprobada en 2015, establece el objetivo del 35% de energías limpias para 2024. Esta etiqueta incluye renovables y otros tipos de centrales como las nucleares. López Obrador ya recibió un llamado de atención de parte de Naciones Unidas en noviembre pasado debido a los cambios en el mercado eléctrico y a su apuesta por incrementar la producción petrolera. El Informe sobre la Brecha de Emisiones de la organización internacional advertía que el Gobierno



"había detenido años de progreso en el sector que amenazan con revertir el progreso logrado".

El artículo 1º de la Ley de Transición Energética señala:

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

Es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y reglamentaria de los párrafos 6 y 8 del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los transitorios Décimo Séptimo y Décimo Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

Los artículos transitorios Décimo Séptimo y Décimo Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 establecen:

Décimo Séptimo. Dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, para establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente, en todos los procesos relacionados con la materia del presente Decreto en los que intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o ambos,



mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos. En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes.

Décimo Octavo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del ramo en materia de Energia y en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión emitirá una ley que tenga por objeto regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos.

La Secretaria de Energía mediante acuerdo de fecha 15 de mayo de 2020, expide reglas de operación que denomina "líneas de politica" y que declara obligatorias para los Integrantes de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, organismos constitucionales autónomos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Energía e instituciones de investigación, para garantizar el Suministro Eléctrico confiable, en



cumplimiento a los artículos 1, párrafo segundo, y 132 de la Ley de la Industria Eléctrica, relativos a "promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios" y establecer "la política en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo los criterios para establecer el equilibrio entre estos objetivos", según se motiva en dicho acuerdo por la Secretaria de Energía.

En el referido acuerdo en relación con las energías limpias se establecen lineamientos Generales para la incorporación de estas fuentes conforme a lo señalado en el Objetivo 1.1 y 1.2.3 de la acuerdo:

Objetivo

- 1.1. El objetivo de la presente Política es establecer lineamientos generales que permitan a las autoridades competentes dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 de la LIE, a efecto de garantizar el suministro eléctrico, bajo el principio de Confiabilidad, según se define en ese mismo ordenamiento, en su artículo 3, párrafo primero, fracción X, a fin de operar, regular y supervisar el Funcionamiento Eficiente del SEN, en concordancia con los artículos 1, 25, 27 y 28 de la CPEUM y demás disposiciones citadas en los considerandos de la emisión de este instrumento.
- 1.2.3. Transición Energética Soberana e incorporación ordenada de las Energías Limpias y Generación Distribuida;



En el acuerdo en mención la Secretaría de Energía señala que en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019 - 2033 (PRODESEN) se estableció que se debe aumentar la generación eléctrica con Energías Limpias, y cumplir con los compromisos internacionales en relación con el cambio climático y también se estableció que la electricidad es un servicio público necesario que debe cumplir con los criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Teniendo como principio hacer un uso racional y sostenible de todos los recursos energéticos y tecnologías disponibles para el desarrollo nacional e integrar de manera ordenada, sostenible y confiable las Energías Limpias, en la matriz energética nacional, para con ello promover la generación y uso de Energías Limpias que contribuyan a la reducción de Gases de Efecto Invernadero y la recuperación de los ecosistemas.

El acuerdo detalla en sus antecedentes que en la Política de Transición Energética señalada en el PRODESEN se establece:

- a) La incorporación de Energías Limpias en el sistema energético nacional en el marco integral de energías primarias, tecnologías y sistemas de producción y uso de energía, integrándolas de manera racional y económicamente viable, según las necesidades de demanda y el potencial de generación de energía;
- La incorporación de Energías Limpias debe ser consistente con criterios de integralidad y Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como del aumento del costo-beneficio en relación con los lugares de generación y demanda de energía;
- c) Todos los participantes de Centrales Eléctricas con base en Energías
 Limpias deben asegurar la disponibilidad e inversiones necesarias para



proveer los Servicios Conexos requeridos por el Sistema Eléctrico Nacional para su eventual incorporación a la Red Eléctrica: reservas rodantes, no rodante, operativa, reactiva y suplementaria; regulación de frecuencia, regulación y control de voltaje, arranque de emergencia y arranque negro, y

d) Las Centrales Eléctricas síncronas y asíncronas interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional deben participar permanentemente en el control primario de frecuencia y la respuesta de potencia activa al control primario de la frecuencia, se ajustará a los criterios de requerimientos que establezca el Centro Nacional de Control de Energía para mantener la Confiabilidad y cumplir con la calidad de frecuencia, el control de la capacidad de transmisión por los principales enlaces interregionales de transmisión, la estabilidad del sistema y los recursos de generación necesarios para compensar la intermitencia en el Sistema Eléctrico Nacional, de conformidad con los criterios que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con base en la presente Política;

En el acuerdo se reconoce que derivado de sus compromisos internacionales en materia de incorporación de Energías Limpias a la matriz energética, distintos países se enfrentan a la problemática de incorporar Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente a los Sistemas Eléctricos, de manera confiable y segura, y que por esa razón distintas naciones se encuentran modificando sus marcos jurídicos que permitan una transición energética ordenada, sin afectar la Confiabilidad y Continuidad de sus respectivos sistemas eléctricos.

Se reconoce también en el acuerdo que en la operación de la Sistema Eléctrico Nacional se observa que, por el efecto de la nubosidad en la irradiación, las rampas ascendentes y descendentes en las Centrales Eléctricas Fotovoltaicas, y los



cambios en la velocidad por ráfagas de viento en las Centrales Eléctricas Eólicas, se ha requerido de diversos Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista que han sido suministrados por las unidades de Centrales Eléctricas a base de combustibles fósiles (ciclos combinados, termoeléctricas convencionales, carboeléctricas, turbogases, etc.) e hidráulicas principalmente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que deben ser reconocido y que dicha política pretende mejorar las necesidades incrementales de satisfacción de la demanda energética de los Usuarios Finales bajo condiciones de suficiencia y Seguridad de Despacho, aumentando la habilidad del Sistema Eléctrico Nacional de solucionar Estados Operativos de Alerta y Emergencia presentes en el servicio de Suministro de energía, por restricciones operativas de generación (niveles insuficientes de Reserva Operativa), transmisión, transformación y diseño, que están asociadas con limitaciones de estabilidad angular, de voltaje y de frecuencia; caracterizadas por límites máximos y mínimos; provocados por sobrecargas en la Red Nacional de Transmisión, así como las afectaciones en la tensión, la frecuencia y el factor de potencia, presentes cuando superan los rangos establecidos, y las interrupciones del servicio, reduciendo su frecuencia y duración, por lo que los lineamientos contemplan de manera más ordenada la penetración de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaicas y eólicas, previendo que los Estados Operativos de Alerta y Emergencia se reduzcan a un mínimo de acuerdo a las experiencias internacionales, disminuyendo en lo posible las salidas forzadas asociadas a la generación, particularmente peligrosas en las rampas de salida y puesta del sol, así como en las horas críticas del Sistema Eléctrico Nacional y que exponen a daños financieros al Sistema Eléctrico Nacional, así como a los Usuarios Finales. Dicho fortalecimiento se realizará a través de la optimización de los elementos que conforman el Sistema Eléctrico Nacional en su conjunto.



Los lineamientos expedidos por la Secretaria de Energía en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020, los funda en el artículo 5 fracciones XXIII, XXIV y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, publicado el 31 de octubre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación que establecen que su titular tendrá como facultades indelegables establecer, conducir y coordinar la política energética del país; ejercer los derechos de la Nación respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, transmitir, distribuir, comercializar, y abastecer de energía eléctrica; así como las demás que con tal carácter se establezcan por ley; sin embargo en ningún momento se contrasta, ní armoniza con el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía expedido por la Secretaría de Energía en cumplimiento al artículo Décimo Octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, elaboró el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 (Pronase), que fue aprobado por el Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014.

El PRONASE es el documento rector del aprovechamiento sustentable de la energía en México y será de observancia obligatoria para la Secretaría de Energía y las entidades paraestatales coordinadas por la misma; las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se sujetarán a sus disposiciones cuando dicho programa incida en el ámbito de sus respectivas competencias.



El Programa consta de seis objetivos, 18 estrategias y 66 líneas de acción, que permitirán alcanzar el uso óptimo de la energia en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo. Asimismo, considera seis rubros que impulsarán y promoverán la eficiencia energética en el país, tales como:

Programas de eficiencia energética
Regulación de la eficiencia energética
Mecanismos de cooperación
Capacidades institucionales
Cultura del ahorro de la energía
Investigación y desarrollo tecnológico

El proceso de elaboración del Programa incluyó una consulta pública entre los meses de octubre de 2013 hasta febrero 2014; también durante el mes de noviembre de 2013, en coordinación con la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía realizó tres foros consultivos enfocados en los rubros que integran el Programa, logrando la participación de instituciones de los sectores público, privado, académico y social. Asimismo realizó más de 30 visitas a instituciones de gobierno para coordinar acciones comunes que incidan en la promoción y uso eficiente de la energía.

Es importante mencionar que el Pronase está vinculado con el Programa Especial de Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018, que también se constituye como un programa especial del sector energía, así como con el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual se publicó en el Diario Oficial de la



Federación el 28 de abril de 2014 en cumplimiento a la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, pero además en atención a la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

El programa se elaboró en el seno del Consejo Consultivo para las Energías Renovables, iniciándose los trabajos en el mes de junio de 2013. No fue sino hasta los meses de enero a marzo que se realizaron adecuaciones para incorporar mandatos ya establecidos en la reforma constitucional en materia de energía. Se establecieron cinco objetivos:

Objetivo 1. Aumentar la capacidad instalada y la generación de electricidad a partir de fuentes renovables de energía.

Objetivo 2. Incrementar la inversión pública y privada en la generación, así como en la construcción y ampliación de la infraestructura para su interconexión.

Objetivo 3. Incrementar la participación de biocombustibles en la matriz energética nacional.

Objetivo 4. Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor en energías renovables.

Objetivo 5. Democratizar el acceso a las energías renovables mediante la electrificación rural, el aprovechamiento térmico y la participación social.

Con ello se desarrollaron 24 estrategias y 118 líneas de acción y su seguimiento se realizará mediante 10 indicadores. Destacan los siguientes elementos:

a) En el indicador de generación de energías renovables y cogeneración eficiente, la meta es alcanzar 24.9% en 2018 partiendo de una línea base de 14.78% en 2012.



- El indicador de días trámites y cumplimiento de la Estrategia Digital Nacional reflejará las futuras mejoras administrativas y regulatorias.
- c) El indicador de reservas probadas de geotermia reflejará los efectos de inversión gracias a reformas legales en materia de geotermia.
- d) El índice de cadenas de valor reflejará la consolidación del sector empresarial mexicana, como se propone gracias a la reforma energética.

En el acuerdo emitido por la Secretaria de Energía publicado en el diario oficial de la federación el 15 de mayo de 2020, se citan los programas anteriores mencionando que se busca que no se contraponga con los principios relacionados con la confiabilidad establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica y asegurar la congruencia entre ellos, en los siguientes términos:

"Que el artículo 14, fracciones IV, XVI y XVII, de la Ley de Transición Energética establece que corresponde a la Secretaría de Energía promover el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de generación y Aprovechamiento de Energías Limpias y el Aprovechamiento sustentable de la energía, que México haya adquirido y cuyo cumplimiento esté relacionado directamente con esta Ley, en condiciones de viabilidad económica y sin menoscabo de la competitividad; promover, en condiciones de sustentabilidad económica, la construcción de las obras de infraestructura eléctrica que redunden en un beneficio sistémico y faciliten la interconexión de Energías Limpias al Sistema Eléctrico Nacional, infraestructura que deberá realizarse siempre que no se contraponga con los principios relacionados con la confiabilidad establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, y asegurar la congruencia entre la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, el Programa Especial de la Transición Energética, el Programa Nacional para el



Aprovechamiento Sustentable de la Energia y los demás instrumentos de planeación del sector energía, respectivamente;"

"El artículo 14, fracciones IV, XVI y XVII, de la LTE establece que corresponde a la SENER promover el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de generación y Aprovechamiento de Energías Limpias y el Aprovechamiento sustentable de la energía, que México haya adquirido y cuyo cumplimiento esté relacionado directamente con esta Ley, en condiciones de viabilidad económica y sin menoscabo de la competitividad; promover, en condiciones de sustentabilidad económica, la construcción de las obras de infraestructura eléctrica que redunden en un beneficio sistémico y faciliten la interconexión de Energías Limpias al SEN, infraestructura que deberá realizarse siempre que no se contraponga con los principios relacionados con la confiabilidad establecidos en la LIE, y asegurar la congruencia entre la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, el Programa Especial de la Transición Energética, el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y los demás instrumentos de planeación del sector energía, respectivamente."

Aunque en los párrafos transcritos que son parte de los antecedentes de los lineamientos de fecha 15 de mayo de 2020, se citan los dos programas "Programa Especial de la Transición Energética" y "Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía", no se emite ninguna consideración o motivación que busque conciliarles con los nuevos lineamientos de interconexión que se emiten, es más ni se señala ningún dato referente a los mimos, en su contenido o forma, si están refiriendo a los expedidos en el gobierno anterior o son



nuevo, o fueron modificados, ni si se consultaron con la sociedad civil en cumplimiento al principio de deliberación democrática.

Dichos programas son deducidos de la Ley de Transición Energética reglamentaria de los párrafos 6 y 8 del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los transitorios Décimo Séptimo y Décimo Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, la cual tiene como objetivo lo previsto en su artículo 2, en el que obviamente se encuentra la promoción e incremento de las energías limpias en la producción eléctrica, pero en función de obligaciones impuestas al Estado mexicano, lo cual es lógico, pues el origen de dicha norma es el compromiso internacional asumido, como lo hemos explicado ampliamente, dicha obligaciones son medibles, dada la graduación en el incremento de las energías limpias, metas que también se establecen como norma obligatoria, y además en la fracción X de dicho precepto se señala que las obligaciones establecidas en el artículo anterior deberán ser homologadas a los productos consumidos en el territorio nacional, independientemente de su origen, lo que implica la mayor jerarquía técnica de la noma ambiental o de energía limpia sobre cualquier otra, por lo que el principio aplicable en caso de colisión siempre debe ser armonizar otras disposiciones con los objetivos a alcanzar en la Ley de Transición Energética:

Articulo 2.- Para los efectos del artículo anterior, el objeto de la Ley comprende, entre otros:

 Prever el incremento gradual de la participación de las Energías Limpias en la Industria Eléctrica con el objetivo de cumplir las metas establecidas



en materia de generación de energías limpias y de reducción de emisiones;

- Facilitar el cumplimiento de las metas de Energías Limpias y Eficiencia Energética establecidos en esta Ley de una manera económicamente viable;
- III. Incorporar las externalidades en la evaluación de los costos asociados a la operación y expansión de la Industria Eléctrica, incluidos aquellos sobre la salud y el medio ambiente;
- IV. Determinar las obligaciones en materia de aprovechamiento sustentable de la energía y Eficiencia Energética;
- V. Establecer mecanismos de promoción de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes:
- Reducir, bajo condiciones de viabilidad económica, la generación de emisiones contaminantes en la generación de energía eléctrica;
- VII. Apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático, relacionado con las metas de reducción de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y de generación de electricidad provenientes de fuentes de energía limpia;



- VIII. Promover el aprovechamiento sustentable de la energía en el consumo final y los procesos de transformación de la energía;
- Promover el aprovechamiento energético de recursos renovables y de los residuos, y
- X. Las obligaciones establecidas en el artículo anterior deberán ser homologadas a los productos consumidos en el territorio nacional, independientemente de su origen.

La Ley de Transición Energética prevé el principio de simplificación regulatoria el cumplimiento de las Metas y sus disposiciones reglamentarias para todos los integrantes de la Industria Eléctrica en su artículo 9:

Artículo 9.- El Estado Mexicano promoverá que existan las condiciones legales, regulatorias y fiscales para facilitar el cumplimiento de las Metas y sus disposiciones reglamentarias para todos los integrantes de la Industria Eléctrica.

En el artículo 3 fracción XXV de la Ley de Transición Energética, los instrumentos de planeación de estos objetivos son la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, Programa Especial de la Transición Energética y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

El 2 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que la Secretaria de Energía aprueba y publica la actualización de la primera



Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de Transición Energética y el 7 de febrero de 2020 se publicó en Diario Oficial de la Federación, el acuerdo de la Secretaría de Energía por que se aprueba la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de Transición Energética, el cual fue elaborado conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción II, de la Ley de Transición Energética con la propuesta efectuada por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y tomando en cuenta al Consejo Consultivo para la Transición Energética, que en su sesión celebrada el 27 de noviembre de 2019, emitió diversas opiniones y recomendaciones con objeto de coadyuvar en la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios.

Cabe señalar que conforme al artículo 28 de la Ley de Transición Energética la Estrategia se debe actualizar dentro de los primeros seis meses de ejercicio de cada administración, por lo que el acuerdo en mención publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de febrero de 2020 es emitido en forma extemporánea, tomando en cuenta que al administración federal actual inicio el 1 de diciembre de 2018, por lo que se debió haber expedido a más tardar en junio de 2019, pero además no se han actualizado o modificado ni el "Programa Especial de la Transición Energética" ni el "Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia", por lo que siguen vigentes los expedidos en la anterior administración, que derivan precisamente de artículos transitorios de una reforma constitucional.

En la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios que publica la actual administración federal, en ningún momento se menciona que existe una problemática en la interconexión con las centrales



fotovoltaicas o eólicas que pongan en riesgo la calidad del servicio eléctrico del país por su intermitencia, por el contrario mencionan como objetivo legal facilitar el cumplimiento de las metas de energías limpias y eficiencia energética.

En el tema de energías limpias consideran lo siguiente, destacando la solar fotovoltaica y la eólica como las que muestran más prospectiva de desarrollo:

"PANORAMA INTERNACIONAL DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

A partir del año 1973, cuando la economia global enfrentó su primera crisis de precios del petróleo, el interés en alternativas a este combustible se aceleró gradualmente. El encarecimiento del petróleo apresuró la investigación, desarrollo y salida al mercado de tecnologías nuevas o mejoradas, que aumentaron el rendimiento energético de los equipos y sistemas que dependen del mismo o que, particularmente en la generación de electricidad, aprovechan recursos renovables como la irradiación solar, el viento o la bioenergía. Esto inició un proceso de avances que hoy se refleja en precios unitarios de energía que compiten con los equivalentes que funcionan con combustibles fósiles.

En este escenario de cambio tecnológico se ubican también los asociados a la arquitectura misma del sector eléctrico, donde existe una transformación que lleva aceleradamente de un sistema centralizado, con grandes Centrales Eléctricas que funcionan fuera de las ciudades, a uno donde operan muchas plantas pequeñas en la propia instalación de los usuarios finales con capacidad de almacenamiento.

Asimismo, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han generado una mayor integración de los sistemas, ampliando el alcance de los sistemas energéticos en su funcionamiento más allá de las Centrales



Eléctricas y las redes de transporte y distribución para incluir a los equipos de los usuarios finales como parte funcional de esos sistemas.

En particular, resaltan los siguientes procesos: oferta energética a partir de energías renovables, que sea competitiva con los combustibles fósiles; oferta de equipos de uso final con mayor rendimiento energético; y desarrollo acelerado de tecnologías integradoras.

2.1 Oferta energética a partir de energías renovables y limpias competitivas con combustibles fósiles

Entre las tecnologías para aprovechar las energías renovables que más han evolucionado en los últimos años, y que se ubican como las más competitivas respecto de la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles en el mediano plazo, están las que aprovechan el viento y la energía solar fotovoltaica.

Energía eólica. Uno de los procesos más relevantes en tecnología de generación de electricidad de los últimos 30 años ha sido la maduración y abaratamiento de la tecnología de aprovechamiento del viento, lo que ha llevado a un crecimiento extraordinario de la capacidad instalada de estos sistemas,

impulsado por el hecho de que, a partir de 1982 a la fecha, el costo de instalación de plantas eólicas ha bajado en más de 60%(2).

Energía solar fotovoltaica. La generación de electricidad a partir de energía solar, muy particularmente a través de celdas fotovoltaicas, se ha convertido en una alternativa muy competitiva a partir del abaratamiento de los equipos de aprovechamiento, con una reducción de precio de más de 90% en 30 años(3).

Otras fuentes de energia limpia importantes y aplicables para México son:



- Energías del océano. El aprovechamiento de la energía asociada al mar ya sea por oleaje, marea, salinidad o conversión térmica es de gran importancia para países con grandes áreas costeras. Aunque aún es incipiente en cuanto a inversiones, entre 2010 y 2018 la capacidad instalada a nivel mundial pasó de 250 MW a 532 MW.(4)
- Geotermia. La energía geotérmica puede utilizarse para calefacción, enfriamiento o generación de electricidad. Los principales beneficios son que no depende de las condiciones del clima y tiene altos factores de capacidad, por lo que es idónea para suministrar electricidad de carga base, así como proveer servicios auxiliares y, en algunos casos, asegurar flexibilidad de corto y largo plazo. La capacidad instalada entre 2010 y 2018 pasó de 9,998 MW a 13,329 MW a nivel internacional.(5)
- Bioenergía. Cerca del 75% de la energía renovable utilizada en el mundo involucra bioenergía, con más de la mitad de ese consumo relacionado con uso tradicional de biomasa. La bioenergía representa casi 10% del total del consumo final de energía y representó 1.4% de la generación eléctrica en 2015. La biomasa tiene un potencial significativo para aumentar la oferta energética en países densamente poblados, que tienen una demanda de energía en aumento, ya que se puede utilizar directamente para calefacción, generación de electricidad, o también puede convertirse en sustitutos de petrolíferos y gas. Entre 2010 y 2018, la capacidad instalada pasó de 67,929 MW a 115,731 MW en el mundo, contabilizando biomasa sólida, biogás, desechos renovables y biocombustibles líquidos.(6)
- Cogeneración eficiente. Las aplicaciones donde se utiliza la cogeneración corresponden a las industriales, comerciales, residenciales y de calefacción de distrito. Los avances tecnológicos han llevado a la disponibilidad de



sistemas de cogeneración más pequeños, con menores costos y niveles de emisiones, además de adaptables a usos particulares. Como resultado, la cogeneración ha aumentado en aplicaciones pequeñas para los sectores comercial y servicios.(7)"

En el aparatado de metas, la estrategia de esta administración federal señala lo siguiente:

PROSPECTIVA Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

5.1 Consideraciones legales y programáticas de referencia para los escenarios

Conforme lo establecido en la Ley de Transición Energética (LTE), la Secretaría de Energía (SENER), con el apoyo de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), actualiza los escenarios y metas de Energías Limpias y Eficiencia Energética de la presente Estrategia. Al respecto, la fracción III del artículo 28 de la LTE, señala que la parte prospectiva de la Estrategia deberá actualizarse dentro de los primeros seis meses de cada Administración Federal, cumpliendo con los requisitos de calidad en las mejores prácticas de este tipo de instrumentos.

La trascendencia de esta actualización en cuanto a los escenarios prospectivos y metas tiene diferentes connotaciones, tales como:

 Reconocer una planeación dinámica que indica tanto una nueva trayectoria prospectiva de generación de electricidad mediante energías limpias, así como un escenario prospectivo del consumo nacional de energía cuyo crecimiento podría ser estabilizado mediante acciones de eficiencia energética factibles;



- Redireccionar el rumbo de las metas nacionales de energías limpias y eficiencia energética, dado que no se alcanzaron al cierre de la administración anterior;
- Proponer nuevas trayectorias prospectivas de mediano y largo plazo que sirvan de referencia para fijar las metas de corto plazo que establecerán los programas especiales del sector energía que se mencionan en la LTE;
- Establecer rutas tecnológicas que puedan contribuir hacia una transición energética soberna y acelerada con bienestar social, que coadyuve a la seguridad energética de la nación;
- Incentivar la innovación y el desarrollo de las tecnologías limpias y eficientes en el país que haga sostenible la transición energética;
- Promover las tecnologías limpias y eficientes que contribuirán a la mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI) en las siguientes décadas;
- Actualizar las consideraciones del contexto nacional en los ámbitos macroeconómico, sectorial, social, demográfico e institucional; e
- Integrar una visión tecnológica del sector energía que apoye la transición energética soberana de México.

5.2 Las Metas

Los escenarios y metas que se establecen en la Estrategia parten de manera fundamental de lo que fijan la LTE y la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), y se reflejan en una contribución de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Cambio Climático (LGCC), y en instrumentos que de ellas derivan, tales como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y la Contribución Nacionalmente



Determinada de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

La LTE define a las metas como "los objetivos, expresados en términos numéricos absolutos o relativos, que la Nación adopta en su conjunto, bajo la tutela del Estado, con el fin de llegar, en un tiempo específico, a tener una generación y consumo de energía eléctrica mediante energías limpias o de eficiencia energética". Cabe señalar que las metas de energías limpias y de eficiencia energética tienen distinto carácter vinculatorio y de flexibilidad de definición en la LTE.

5.3 Energias limpias

En lo que corresponde a energias limpias, el articulo tercero transitorio de la LTE mandata a la SENER a fijar como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el 2018, del 30% para 2021 y del 35% para 2024.

Tomando en cuenta que en lo que corresponde a energías limpias, el artículo tercero transitorio de la Ley de Transición Energética establece a la Secretaría de Energía fijar como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el 2018, del 30% para 2021 y del 35% para 2024, no es posible que se suspendan proyectos en curso de producción energía eléctrica con energía solar y eólica, bajo el argumento de problemas de intermitencia e interconexión, sin siquiera analizar el impacto que ello tendrá en la hoja de ruta de las metas por alcanzar, que dese luego no se han transparentado, pues la actual administración federal ha actuado con omisión y negligencia en la actualización de los programas y su seguimiento puntual, lejos de facilitara y flexibilizar la incorporación de estas nuevas fuentes de energía, las obstaculiza con



barreras técnicas que persiguen frenar la inversión privada, bajo una óptica "nacionalista", y no como un principio rector como lo mandata nuestra carta magna.

En un Estado federal, el principio de división funcional del poder se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas a los órganos superiores del Estado; en este sentido, el principio que cierra la posibilidad de actuación de las autoridades dentro del ordenamiento jurídico, es que todo aquello que no se encuentra expresamente facultado para las autoridades se encuentra prohibido, y que las autoridades sólo pueden realizar los actos dictados sobre bases expresas previstas en el ordenamiento y, en particular, en la Constitución.

Este sistema competencial establecido en la Constitución se expresa positivamente de varias maneras: existen prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; existen competencias de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida y, finalmente, existen competencias de ejercicio obligatorio, en donde el órgano del Estado se encuentra obligado a ejercer la competencia establecida en la Constitución.

En esta materia la competencia que el constituyente permanente otorgó el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía en la materia de incursión de energía limpias en la producción eléctrica del país, no está acotada a la potestad de decidir si la ejercerán o no, si no que resultan verdaderas obligaciones, con metas e indicadores de transición hacia las energías limpias, por tanto, el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Energía deben ser congruentes con las mismas por lo que son facultades o competencias de ejercicio obligatorio, pues adicionan un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de realizarlas, con la finalidad de lograr



un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones, de ahí que en caso de que no se realicen, el incumplimiento trae aparejada una sanción.

Esta obligación (mandato) de ejercicio de la facultad para la expedición de normas o lineamientos de carácter general, puede encontrarse de manera expresa o implícita en las normas constitucionales, así sea en su texto mismo o en su derecho transitorio. Respecto de esto último, ello es así en tanto que las normas transitorias cumplen con la función de establecer las obligaciones, parámetros y tiempos para la adecuación de los cambios normativos establecidos por el órgano de reforma constitucional.

Atendiendo a esta clasificación (competencias o facultades de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo), es necesario considerar las posibilidades de no ejercicio de las mismas, lo cual se traduce en omisiones.

Claramente existen solamente dos opciones en relación con el no ejercicio de las competencias concedidas a la autoridad por el constituyente permanente; por un lado, se puede dar una omisión absoluta por parte del Estado, en donde éste simplemente no ha ejercido su competencia de crear los programas, lineamientos o normas de carácter general en ningún sentido, ni ha externado normativamente ninguna voluntad para hacerlo, de ahí que la misma siga siendo puramente potencial; por otro lado, el órgano estatal puede haber ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de la norma, lineamiento o programa. En este último caso nos encontramos frente a omisiones relativas en cuanto al ejercicio de la competencia establecida constitucionalmente.



De lo anterior se aprecia que, tratándose de omisiones respecto de las competencias de ejercicio obligatorio o potestativo, éstas se pueden clasificar de la siguiente manera;

- Omisiones absolutas en competencias de ejercicio obligatorio;
- Omisiones relativas en competencias de ejercicio obligatorio;
- 3. Omisiones absolutas en competencias de ejercicio potestativo; y,
- Omisiones relativas en competencias de ejercicio potestativo.

Así, tendremos una omisión normativa en competencias de ejercicio obligatorio a cargo del Estado, cuando éste tenga una obligación o mandato relativo a la expedición de una norma de carácter general determinada, y no la haya expedido. Por otro lado, estaremos en presencia de una omisión normativa relativa en competencias de ejercicio obligatorio a cargo del Estado, cuando éste la emita, teniendo la obligación o un mandato relativo a la expedición de cierta norma de carácter general, pero lo haga de manera incompleta o deficiente.

Por omisiones normativas absolutas en competencias de ejercicio potestativo, podemos comprender aquellas en las que el Estado decide no actuar, debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga.

En el caso de las omisiones normativas relativas en competencias de ejercicio potestativo, estaremos ante ellas cuando el Estado decida hacer uso de su competencia potestativa para emitir la norma de carácter general, pero al emitir la ley, lo haga de manera incompleta o deficiente.

En el caso que estamos planteando es claro que el Gobierno Federal se ubica en el caso de una omisión normativa relativa en competencias de ejercicio obligatorio a cargo del Estado, pues teniendo la obligación de la expedición de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, Programa Especial de la Transición Energética y el Programa Nacional para el



Aprovechamiento Sustentable de la Energia lo hace de forma deficiente, en cuanto a que en primer lugar solo emite la primera de ellas mencionadas y de forma extemporánea, luego los otros dos programas no los ha emitido, resultando entonces que deben aplicarse el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia 2014-2018 (Pronase) y el Programa Especial de Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014, pero lo más grave es que mediante dos acuerdos incumple con la Estrategia y los dos programas.

En el acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, expedido por la Secretaria de Energía publicado en el Diarios Oficial de la Federación de fecha 15 de mayo de 2020 en los antecedentes señala lo siguiente, reconociendo la necesidad que exista congruencia entre la Ley de Transición Energética y los principios relacionados con la confiabilidad establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica:

"Que el artículo 14, fracciones IV, XVI y XVII, de la Ley de Transición Energética establece que corresponde a la Secretaría de Energía promover el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de generación y Aprovechamiento de Energías Limpias y el Aprovechamiento sustentable de la energía, que México haya adquirido y cuyo cumplimiento esté relacionado directamente con esta Ley, en condiciones de viabilidad económica y sin menoscabo de la competitividad; promover, en condiciones de sustentabilidad económica, la construcción de las obras de infraestructura eléctrica que redunden en un beneficio sistémico y faciliten la interconexión de Energías Limpias al Sistema Eléctrico Nacional, infraestructura que deberá realizarse siempre que no se contraponga con los principios



relacionados con la confiabilidad establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, y asegurar la congruencia entre la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, el Programa Especial de la Transición Energética, el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y los demás instrumentos de planeación del sector energía, respectivamente;"

No obstante lo anterior, no motiva dicha congruencia armonizando lo establecido en la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, Programa Especial de la Transición Energética y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, (PRODESEN), pues básicamente se sustenta en éste, deducido de la Ley de la Industria Eléctrica, para señalar básicamente que por problemas de intermitencia las energías limpias no garantizan la confiablidad y continuidad del sistema eléctrico nacional, pero sin referir cómo se resolverá el problema a su favor, sino suspendiendo las interconexiones de las centrales productoras de energía limpia en curso, desde luego sin referir absolutamente nada del impacto en las metas de producción de electricidad con energías limpias conforme a la Ley de Transición Energética.

La Ley de la Industria Eléctrica, también es reglamentaria de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y forma parte de la aplicación de las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y en su artículo 1º señala lo siguiente, estableciendo como principio el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de



Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes, que es el el objetivo básico de la Ley de Transición Energética:

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta Ley son de interés social y orden público. Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes.

Por otra parte, en el artículo décimo sexto transitorio de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 se señala que será el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado, el encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión en los términos siguientes:

"Décimo Sexto. Dentro de los plazos que se señalan a continuación, el Poder Ejecutivo Federal deberá proveer los siguientes decretos:



a) ...

b) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria de la industria eléctrica, emitirá el Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución, y las demás facultades que se determinen en la ley y en su Decreto de creación. En dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro.

El Decreto proveerá lo conducente para que la Comisión Federal de Electricidad transfiera los recursos que el Centro Nacional de Control de Energía requiera para el cumplimiento de sus facultades.

El Centro Nacional de Control de Energía dará a la Comisión Federal de Electricidad el apoyo necesario, hasta por doce meses posteriores a su creación, para que continúe operando sus redes del servicio público de transmisión y distribución en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad."

Es en cumplimiento a dicho artículo décimo sexto transitorio se crea en la Ley de la Industria Eléctrica el Centro Nacional de Control de Energía conforme al artículo 107:



Artículo 107.- El CENACE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, así como las demás facultades señaladas en esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Luego en el artículo 108 de la Ley de la Industria Eléctrica se establecen sus facultades, como quien ejerce el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, que está integrado por, la Red Nacional de Transmisión; las Redes Generales de Distribución; las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución y los equipos e instalaciones del CENACE utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, dentro de las cuales se señala además que tiene la facultad de ddeterminar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar los Participantes del Mercado, Transportistas y Distribuidores, sujeto a la regulación y supervisión de la CRE en dichas materias así como operar el Mercado Eléctrico Mayorista en condiciones que promuevan la competencia, eficiencia y no indebida discriminación.

El artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica en cita, en materia de acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, así como



de la prestación de los servicios en dichas redes, entre otras, establece las siguientes facultades relevantes para la Comisión Reguladora de Energía:

- Establecer las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, así como las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico, y resolver sobre su modificación;
- Expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión y la distribución;
- Autorizar los modelos de contrato que celebre el Centro Nacional de Control de Energía con los Participantes del Mercado, así como los modelos de convenio que se requieran entre el Centro Nacional de Control de Energía, los Transportistas y los Distribuidores;
- Expedir modelos de contrato de interconexión de Centrales Eléctricas, conexión de Centros de Carga, y los demás que se requieran;
- Emitir opinión respecto de los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el Centro Nacional de Control de Energía o por los Distribuidores y solicitar cambios a las mismas;
- Autorizar las especificaciones técnicas generales que proponga el Centro Nacional de Control de Energía, requeridas para la interconexión de nuevas Centrales Eléctricas y la conexión de nuevos Centros de Carga, y autorizar los cobros para la realización de estudios de las características específicas de la infraestructura requerida y para los otros componentes del proceso de interconexión y conexión;
- Emitir los términos y condiciones y expedir las metodologías de cálculo, criterios y bases para determinar y actualizar el monto de las aportaciones que los interesados deberán realizar para la construcción de obras, ampliaciones y



modificaciones de transmisión y distribución cuando los costos no se recuperen a través de la regulación tarifaria, y aprobar los modelos de convenio correspondientes;

- Expedir y aplicar la regulación necesaria en materia de eficiencia, Calidad,
 Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico
 Nacional, en línea con la Política que emita la Secretaría de Energia en estas materias;
- Dictar o ejecutar las medidas necesarias para proteger los intereses del público en relación con la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, y solicitar a otras autoridades, en el ámbito de su competencia, la aplicación de medidas de seguridad adicionales o necesarias;

En este contexto la Secretaria de Energía en el acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, señala que tiene el propósito, prever que los Estados Operativos de Alerta y Emergencia derivados de la penetración de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaicas y eólicas se reduzcan a un mínimo de acuerdo a las experiencias internacionales, disminuyendo en lo posible las salidas forzadas asociadas a la generación, particularmente peligrosas en las rampas de salida y puesta del sol, así como en las horas críticas del Sistema Eléctrico Nacional y que exponen a daños financieros al Sistema Eléctrico Nacional, así como a los Usuarios Finales, y emite los siguientes lineamientos, en los que suspende los contratos de interconexión y determina que en su oportunidad la Secretaría de Energía determinará la fecha de reapertura de recepción de solicitudes de interconexión y su seguimiento sin tener facultades legales para proceder de esa manera:

"10. Incorporación de Energias Limpias Intermitentes



- 10.1. La integración de Capacidad Instalada de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente en el SEN se mantendrá para todas las Centrales Eléctricas que hayan alcanzado el Contrato de Interconexión un día antes de la publicación de esta Política en el DOF. Si para alguna Central Eléctrica con Energía Limpia Intermitente, eólica o fotovoltaica, se cancela su Contrato de Interconexión o Permiso de Generación, el CENACE evaluará las solicitudes para que, en función de la posición de ingreso y avance en su plataforma denominada "SIASIC", del punto de Interconexión de la Solicitud y de la capacidad de alojamiento regional de Generación Limpia Intermitente considerando la Confiabilidad del Sistema, se determinará la viabilidad de aceptar la solicitud del Estudio y continuar el proceso de éste.
- 10.2. Si alguna Central Eléctrica con Energía Limpia Intermitente, eólica o fotovoltaica, solicita un Estudio en un punto de Interconexión, zona, región o Sistema en la cual ya se tienen elementos de transmisión y transformación congestionados, por falta de recursos de generación para compensar la intermitencia y lograr mantener el control de la frecuencia, del voltaje y la confiabilidad y selectividad de los esquemas de protecciones. El CENACE con base en criterios de suficiencia, Seguridad de Despacho y eficiencia económica, podrá rechazar dichas solicitudes. En su oportunidad la SENER determinará la fecha de reapertura de recepción de Solicitudes y el seguimiento a las Solicitudes en trámite.
- 10.3. Los Distribuidores deberán aplicar estrictamente lo establecido en el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con capacidad menor a 0.5 MW y coordinarse con el CENACE para determinar la capacidad de integración de Generación Distribuida con Energía Limpia intermitente



considerando la ubicación geográfica, así como subestación eléctrica, zona, región o Sistema.

- 10.4. El CENACE para los estudios para la expansión de la RNT y las RGD del MEM, y los estudios de interconexión de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente deberá considerar:
- La dispersión geográfica en la penetración de las Centrales
 Eléctricas con Energía

Limpia intermitente por zona, región y Sistema;

- 10.4.2. Las limitaciones de recursos técnicos con la penetración de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia intermitente por Subestación Eléctrica, zona, región y Sistema;
- Las necesidades de Obras de Refuerzos;
- Las características climatológicas de cada punto de interconexión, por zona, región y Sistema;
- El espaciamiento entre las Centrales Eléctricas con Energía Limpia intermitente por Subestación Eléctrica, zona, región y Sistema;
- 10.4.6. La capacidad de regulación primaria de la frecuencia, regulación de voltaje, la inercia rotatoria y nivel de corto circuito por zona, región y Sistema;
- 10.4.7. El efecto en la Confiabilidad por el desplazamiento en el despacho de las Centrales Eléctricas Convencionales por la incorporación de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente;
- 10.4.8. Reconocimiento de los costos operativos en las Centrales Eléctricas Convencionales que realizan el control de frecuencia de voltaje, rampas e inercia rotatoria, por la incorporación de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia intermitente;



- 10.4.9. La capacidad interconectada y futura de interconexión de la Generación Distribuida con tecnologías eólicas y fotovoltaicas por subestación eléctricas, zona, región y Sistema;
- 10.4.10. La incorporación de proyectos con tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica, de control de voltaje, de control de flujos de potencia, de incremento de inercia rotatoria y de incremento de niveles de corto circuito, y 10.4.11. El Distribuidor y los Suministradores deberán actualizar de forma mensual a la SENER, CRE y CENACE de la incorporación de la Generación Distribuida por circuito de distribución, subestación eléctrica, zona, región y Sistema.
- 10.5. Para garantizar la Confiabilidad por control de voltaje, las Centrales Eléctricas con Energías Limpias Intermitentes, eólicas y fotovoltaicas interconectadas al SEN, deberán garantizar el control del voltaje de manera permanente.
- 10.6. La incorporación de Generación Distribuida con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaica y eólica, debe ser con inversores inteligentes con la capacidad de regular frecuencia y voltaje, y equipamiento necesario para monitoreo, comunicación y control desde los Centros de Control de Distribución y CENACE.
- 10.7. Para los estudios de interconexión de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, la opción de Disponibilidad de Entrega Física considerará las horas críticas previstas para el año que entra en operación comercial la Central Eléctrica y el factor de planta promedio de la zona, región o Sistema donde se vaya a interconectar, para esas 100 horas críticas.
- 10.8. Respecto al Mercado para el Balance de Potencia, las Centrales con fuente de Energía Limpia Intermitente no proveen una cantidad firme



Potencia, por tanto, no aportan a la Confiabilidad del Sistema Eléctrico. En los cálculos del Mercado para el Balance de Potencia considerar la Capacidad Entregada de estas Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente como una disminución en la Potencia Anual Acreditada del Participante que las represente en el MEM, y como una disminución en los Requisitos Anuales de Potencia (RAP) de todas las Entidades Responsables de Carga, en forma proporcional a su RAP inicial.

10.9. Las Centrales de Generación Distribuida Limpia deberán cumplir con las características necesarias en sus equipos de interconexión para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal que opera las RGD, así como la seguridad de la infraestructura del Generador Exento y de los Distribuidores ante una contingencia eléctrica; además se deben realizar los estudios de interconexión con base a la topología eléctrica, concentración de Centros de Carga y unidades de Centrales Eléctricas.

10.10. Los estudios de interconexión determinarán las obras de interconexión y Obras de Refuerzo necesarias en las RGD; los requerimientos y características de inversores inteligentes para los sistemas fotovoltaicos o la regulación de frecuencia y voltaje en turbinas eólicas, así como la necesidad de establecer monitoreo, comunicación y control desde los Centros de Control de Distribución y del CENACE.

Estos lineamientos son arbitrarios, pues las especificaciones técnicas de interconexión deben autorizarse por la Comisión Reguladora de Energía conforme se señala en el artículo 12 fracción XXIV de la Ley de la Industria Eléctrica en relación con las especificaciones técnicas generales requeridas para realizar las



interconexiones y conexiones que expida el Centro nacional de Control de Energía de acuerdo con lo señalado en el artículo 33 del mismo ordenamiento:

Artículo 12.- La CRE está facultada para:

207

XXIV. Autorizar las especificaciones técnicas generales que proponga el CENACE, requeridas para la interconexión de nuevas Centrales Eléctricas y la conexión de nuevos Centros de Carga, y autorizar los cobros para la realización de estudios de las características específicas de la infraestructura requerida y para los otros componentes del proceso de interconexión y conexión;

..

Artículo 33.- Los Transportistas y los Distribuidores están obligados a interconectar a sus redes las Centrales Eléctricas cuyos representantes lo soliciten, y a conectar a sus redes los Centros de Carga cuyos representantes lo soliciten, en condiciones no indebidamente discriminatorias, cuando ello sea técnicamente factible.

Los Transportistas y los Distribuidores deberán interconectar las Centrales Eléctricas y conectar los Centros de Carga en los plazos señalados en este artículo, una vez que se hayan completado las obras específicas determinadas por el CENACE y cumplido con las normas oficiales mexicanas y los demás estándares y especificaciones aplicables a dichas instalaciones. En caso de que los Transportistas o los Distribuidores nieguen o dilaten la interconexión o conexión, la CRE determinará si existe causa justificada para ello.



Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, el CENACE está obligado, al menos, a:

- Definir las especificaciones técnicas generales requeridas para realizar las interconexiones y conexiones;
- Definir las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la interconexión o conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro de Carga;
- III. Instruir a los Transportistas o a los Distribuidores la celebración del contrato de interconexión o conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro de Carga, una vez definidas las características específicas de la infraestructura requerida o determinada la exención de las mismas. Las Reglas del Mercado especificarán los plazos máximos para que el representante solicite la celebración de dicho contrato con base en las características específicas de la infraestructura requerida;
- IV. Comprobar que una unidad de verificación o una unidad de inspección, según corresponda, aprobada en los términos que defina la CRE, certifique en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación para la interconexión o la conexión cumple con las características específicas de la infraestructura requerida establecidas por el CENACE, las normas oficiales mexicanas aplicables distintas a las referidas en la siguiente fracción y los demás estándares aplicables;



V. Comprobar, cuando se trate de conexiones de instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica para servicios en alta tensión y de la prestación de servicios en lugares de concentración pública, que una unidad de verificación, aprobada en los términos que defina la Secretaría, certifique en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas instalaciones, y

Ordenar a las partes la realización de interconexión o conexión físicas.

Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, los Transportistas y los Distribuidores están obligados a celebrar los contratos de interconexión o conexión, con base en los modelos que emita la CRE, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la orden correspondiente por parte del CENACE, y realizar la interconexión o conexión físicas dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de la orden correspondiente del CENACE.

Las Reglas del Mercado establecerán los criterios para que el CENACE omita la determinación de las características específicas de la infraestructura requerida, así como para exentar a las Centrales Eléctricas y los Centros de Carga de la certificación a que se refiere la fracción IV de este artículo, entre otros criterios aplicables.

Conforme al artículo tercero transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica, se señala que durante el periodo de reestructura de la industria eléctrica, la



Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), según corresponda, continuarán prestando los servicios de generación, transmisión, distribución, comercialización y Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional con la finalidad de mantener la Continuidad del Suministro Eléctrico y se facultó en esa ocasión que por única ocasión, la Secretaria de Energía emitiera las primeras Reglas del Mercado y que ejerciera la vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista en los términos del artículo 104 de la Ley de la Industria Eléctrica, con el apoyo técnico de la Comisión Reguladora de Energía, hasta que concluya el primer año de operaciones de dicho mercado, decretando que al final de dicho periodo, las facultades de vigilancia se ejercerán por la Comisión Reguladora de Energía, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, lo que sucedió precisamente

Tercero. Durante el periodo de reestructura de la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energia (CENACE), según corresponda, continuarán prestando los servicios de generación, transmisión, distribución, comercialización y Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional con la finalidad de mantener la Continuidad del Suministro Eléctrico.

La Secretaría de Energía coordinará la reestructura de la industria eléctrica, definirá los plazos del periodo de reestructura y establecerá las políticas y acciones que se requieran para conducir los procesos para su implementación.



Por única ocasión, la Secretaria de Energía emitirá las primeras Reglas del Mercado. Dichas Reglas incluirán las Bases del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas del Mercado que la Secretaria de Energía determine. Para efectos de dicha emisión, la Secretaria de Energía deberá observar lo previsto en el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Secretaría de Energía ejercerá la vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista en los términos del artículo 104 de la Ley de la Industria Eléctrica, con el apoyo técnico de la Comisión Reguladora de Energía, hasta que concluya el primer año de operaciones de dicho mercado. Al final de dicho periodo, las facultades de vigilancia se ejercerán por la Comisión Reguladora de Energía, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica.

La Secretaria de Energía interpretará la Ley para efectos administrativos durante el periodo de reestructura de la industria eléctrica, para fomentar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional durante dicho periodo y para asegurar la implementación eficiente y racional de dicha reestructura.

La Secretaría de Energia declarará la entrada en operación del Mercado Eléctrico Mayorista. Las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica que requieren dicho Mercado estarán vigentes a partir de dicha entrada en operación.



Desde el 27 de enero de 2016 comenzó a operar en el sistema aislado de la península de Baja California, y a partir del 29 de enero de 2016 el mercado Eléctrico Mayorista se puso en marcha para el Sistema Interconectado Nacional.

Desde el inició de las operaciones, la información de precios de electricidad se ha hecho pública y los consumidores y empresas pueden acceder al comportamiento del mercado en tiempo real. En la página de Internet del Centro Nacional de Control de Energía se puede observar cuánto cuesta generar la electricidad en los más de 4 mil nodos que unen al país, lo que permite conocer los costos reales de generación de cada una de las plantas que estén en el mercado y en consecuencia se puede ver, cómo la planta que genere la electricidad más barata será la que el Centro Nacional de Control de Energía como operador independiente, despachará primero, por lo que este esquema busca abaratar los costos de producción de energía y propiciar de forma preferente la incursión de energías limpias en la producción eléctrica del país con metas y objetivos predeterminados.

Las empresas ofertantes cuentan con un banco de información exhaustivo sobre los precios, la oferta y la demanda de energía a lo largo del territorio nacional. Lo anterior permitirá a los inversionistas ir conociendo los costos reales de producción que les servirá como referencia para tomar decisiones sobre las ubicaciones con mayores oportunidades de negocio y las tecnologías más viables para cada región., lo que se buscó es un simplificación y flexibilización administrativa, pues comercializar electricidad bajo el esquema anterior a la nueva normatividad, implicaba barreras de entrada ligadas a largos y complejos trámites, porque los empresarios debían constituirse como sociedad de auto-abasto, como cogenerador, pequeño productor, productor independiente o como importador o exportador.



Ahora, con este nuevo modelo hay una enorme simplificación, dado que únicamente deberán presentar su solicitud de permiso o registro ante la Comisión Reguladora de Energia y firmar un contrato de participante de mercado con el Centro Nacional de Control de Energía.

Su bien es cierto la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional es algo en el que debe existir un principio rector del estado, ello no puede abstraerse e del marco legal aplicable y a la Secretaría de Energía se le dio competencia para interpretar la Ley para efectos administrativos durante el periodo de reestructura de la industria eléctrica, a fin de fomentar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional durante dicho periodo y para asegurar la implementación eficiente y racional de dicha reestructura, pero pasado el término de pre operación que fue de un año las facultades de vigilancia y lineamientos de interconexión son de la Comisión Reguladora de Energía, con apoyo del Centro Nacional de Control de Energía.

Indebidamente la Secretaria de Energía en el acuerdo publicado el 20 de mayo de 2020, abroga el avisos por el que la Secretaria de Energía da a conocer la politica de confiablidad del Sistema Eléctrico Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017 y rompe con el esquema previsto en la Ley de la Industria Eléctrica pues le impone indebidamente a la Comisión reguladora de Energía líneamientos de carácter técnico para llevar a cabo las adecuaciones correspondientes a las Reglas de Mercado y a las "Disposiciones Administrativas de Carácter General que contienen los Criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red, conforme dispone el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica", resultando que ellos es competencia de la Comisión Reguladora de



Energía y no de la Secretaría de Energía que solo tuvo dichas facultades en la fase pre operativa del mercado, conforme a lo señalado en el artículo tercero transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica.

La Comisión Reguladora de Energía es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, como se establece en el párrafo octavo, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia.

Tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Climático a fin de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

De acuerdo al artículo 2 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética serán la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que en su artículo 3 se le reconoce la autonomía técnica y de gestión:

Artículo 3.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión. Contarán con personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los



derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades.

Por su parte en el articulo 42 del citado ordenamiento se establece que la Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

En el artículo tercer transitorio de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética se establece la obligación de la Comisión Reguladora de Energía de expedir su Reglamento Interior:

Tercero.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán expedir su Reglamento Interno dentro de los ciento ochenta dias naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

La normatividad y regulación emitidas por las Comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, que no se oponga a lo dispuesto en ésta, continuará vigente, sin perjuicio de que pueda ser adecuada, modificada o sustituida, en términos de las disposiciones de esta Ley y las demás aplicables.

Además conforme al Artículo 18 del Reglamento Interior corresponde al Órgano de Gobierno el ejercicio de las atribuciones que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Climático, los reglamentos respectivos y las demás disposiciones jurídicas le confieren, entre ellas cito de forma destacada las fracciones, I, XX, XXI, XXII y XXVII que ponen d de manifiesto que la Secretaría de Energía no está facultada para suspender definir



lineamientos de confiabilidad, que son aspectos técnicos que le competen al Comisión Reguladora de Energía y tampoco a suspender los contratos de interconexión:

 Aprobar, emitir y modificar las disposiciones administrativas de carácter general o de carácter interno, resoluciones, acuerdos, directivas, bases y en general la regulación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, con base en la normatividad aplicable;

XX. Expedir modelos de contrato de interconexión de Centrales Eléctricas, conexión de Centros de Carga, compraventa por los Generadores Exentos, compraventa por los Usuarios de Suministro Básico con Demanda Controlable y los demás que se requieran;

XXI. Autorizar al Cenace lleve a cabo subastas para adquirir potencia cuando lo considere necesario con el objeto de asegurar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, determinar la asignación de los costos que resulten de las subastas, y expedir protocolos para que el Cenace gestione la contratación de potencia en casos de emergencia;

XXII. Emitir opinión sobre los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el Cenace o por los Distribuidores, así como solicitar modificaciones a las mismas:

XXVII. Dictar las medidas necesarias para proteger los intereses del público con relación a la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, así como solicitar a otras autoridades competentes la aplicación de medidas de seguridad adicionales o necesarias;



Uno de los mandatos de la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992 fue la constitución de un órgano administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, para resolver las cuestiones derivadas de la interacción entre el sector público y el privado producto de dicha reforma. En consecuencia, la Comisión Reguladora de Energía fue creada mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de octubre de 1993, mismo que entró en vigor el 3 de enero de 1994, según lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de dicho Decreto.

Posteriormente, y seguido a la reforma estructural al sector gasista en 1994, el Poder Legislativo aprobó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, misma que se publicó en el DOF el 31 de octubre de 1995 y que convirtió a la institución en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía con autonomía técnica y operativa y con atribuciones que previamente se encontraban dispersas en la propia Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía. Ello permitió a la Comisión Reguladora de Energía tener la capacidad y facultades constitucionales y legales de implementar el marco regulatorio en los sectores de gas y electricidad.

El 28 de noviembre de 2008, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los decretos que modificaron las responsabilidades de la Comisión Reguladora de Energía, se aprobaron: el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y el Decreto por el que se expide la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento



de la Transición Energética. Estas reformas fortalecieron a la autonomía técnica y de gestión de la Comisión Reguladora de Energía le confirieron mayores atribuciones para regular no sólo el sector de gas y electricidad que ya tenía bajo su responsabilidad, sino también el desarrollo de otras actividades de la industria de los hidrocarburos, así como la generación con fuentes renovables de energía. El 11 de diciembre 2013, se aprobó la reforma de los artículos 5, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reflejó primordialmente en la construcción de un nuevo marco regulatorio, sobre el cual recaen la publicación de 21 leyes secundarias, 24 reglamentos y 1 ordenamiento. Estos cambios dieron origen a un nuevo arreglo institucional que implicó la creación de un fondo y tres instituciones, el fortalecimiento de los órganos reguladores y la transformación de las empresas estatales de hidrocarburos y electricidad, consolidándose la Comisión Reguladora de Energía como un órgano autónomo. que dirige el mercado eléctrico nacional, con facultades para emitir lineamientos de carácter general y por tanto es a quien compete en todo caso expedir reglas de operación obligatorias para los Integrantes de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, organismos constitucionales autónomos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Energía e instituciones de investigación, para garantizar el Suministro Eléctrico confiable, en cumplimiento a los artículos 1, párrafo segundo, y 132 de la Ley de la Industria Eléctrica y no a la Secretaría de Energía, máxime si los emitidos mediante el acuerdo de fecha 15 de mayo de 2020 por dicha Secretaria de forma arbitraria atentan contra la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, Programa Especial de la Transición Energética y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la



Energía y las metas establecidas en la Ley de Transición Energética, creando un una gran incongruencia en el sector, y violando los principios constituciones y legales que hemos reseñado ampliamente en esta exposición de motivos.

Así pues atendiendo a la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía es que con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el presente proyecto de punto de acuerdo bajo el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Energía a fin de que deje sin efectos el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, por ser completamente arbitrario y atentar en contra de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, Programa Especial de la Transición Energética y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, además de violar el derecho humano de todos a un medio ambiente más sano.

SEGUNDO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta al Poder Ejecutivo Estatal y a los Alcaldes Municipales de los sesenta y siete municipios de la entidad a que impugnen en vía de controversia constitucional ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación el



Acuerdo de la Secretaria de Energía por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, por ser completamente arbitrario y atentar en contra de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, Programa Especial de la Transición Energética y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía velando por el derecho humano de todos a un medio ambiente más sano.

ECONÓMICO. - Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que se elabore la minuta en los términos correspondientes, así como remita copia del mismo a las autoridades competentes, para los efectos que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo del Estado de Chihuahua, a los 26 días del mes de mayo del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

DIPUTADO OMAR BAZÁN FLORES Vicepresidente del H. Congreso del Estado